

MEDELLÍN: FRONTERAS DE DISCRIMINACIÓN Y ESPACIOS DE GUERRA

Por JAIME RUIZ RESTREPO¹

Abstract. Medellín is a turbulent and complex scene of configuration and atypical and incessant space reconfiguration like product, not only of the presence of new settlers come from the rural field in a process that, of a side, could well assimilate of decomposition farmer - to the classic way, that is to say, by development of productive forces and, of another side, the very own way to the Latin American economies, by presence of forms production landowners and to the processes of violent expropriation by the presence of the armed actors, but also of the strong migration lived in the last decade, the more as a flight from the scenes military and as product of the simple suspicion, on the part of the combatants, of “entailment” of whole populations with the adversaries armed in fight. I will add in addition intra-urban mobility like product to economic conditions and physical security.

Resumen. Medellín es un escenario turbulento y complejo de configuración y reconfiguración espacial atípica e incesante como producto, no solo de la presencia de nuevos pobladores venidos del campo en un proceso que, de un lado, bien podría asimilarse de descomposición campesina –a la manera clásica, esto es, por desarrollo de fuerzas productivas y, de otro lado, de la manera muy propia a las economías latinoamericanas, por presencia de formas terratenientes de producción- y a los procesos de expropiación violenta por la presencia de los actores armados², sino también de la fuerte migración vivida en la última década, más como una fuga desde los escenarios de guerra y como producto de la simple

¹ Planificador Urbano e investigador, adscrito al Departamento de Sociología de la Universidad de Antioquia, en donde desarrolla las cátedras de “Solución Negociada de Conflictos” y Sociología Urbana. Actualmente, es el director del Centro de Estudios de Opinión de la misma Universidad.

² Estos procesos de descomposición campesina y de expropiación violenta de las tierras urbanas, marcaron el crecimiento urbano de Medellín, al igual que el de muchas de las ciudades colombianas, hasta fines de la década de los 70’s en el siglo pasado.

sospecha, por parte de los combatientes, de “vinculación” de poblaciones enteras³ con los adversarios armados en contienda. Agregaré además la movilidad intraurbana⁴ como producto de condiciones económicas y de seguridad física.

Los límites entre conflicto urbano y violencia cada vez, en nuestro medio, son menos claros, las líneas son más tenues y paulatinamente transitan por los campos de la muerte. Como señalaremos a lo largo de este texto, existen tres factores que actúan como motores de la crisis y conflictividad en Medellín –y que se podrían hacer extensivos a casi todo el territorio nacional: la corrupción, el narcotráfico y el abandono estatal. Ellos actúan como un círculo vicioso, que se retroalimenta incesantemente.

El telón de fondo en el cual se inscribe la violencia urbana es el de un modelo económico con profundas desigualdades sociales que conducen a la exclusión de grandes segmentos de la población. Aunque no deja de preocuparme el riesgo que se corre al enfatizar en las violencias que se viven en las comunas pobres de la ciudad pues ello es, sin duda, una parcialización ideológica.

En esta ciudad, la paz es un proceso contra el cual atentan la crisis económica, el incumplimiento recurrente de las promesas de los políticos, la violencia delincuencial y la existencia de escuadrones de la muerte y grupos de limpieza social.

Ha sido corriente en los esquemas de interpretación de la crisis por la que atraviesa esta ciudad, que se asocie la violencia –la delincuencial, la insurgente y

³ Podría pensarse que la expresión “éxodo” sería una mejor forma de describir este proceso.

⁴ La movilidad intraurbana o el desplazamiento intraurbano, se produce por las amenazas de muerte y de expulsión que se crean como secuelas luego de hostilidades entre grupos armados, o por la negativa de pagar los impuestos exigidos por estos grupos. Generalmente, el desplazamiento se produce de manera individual o por grupos familiares. Es de destacar que esa movilidad produce, además de los impactos culturales y psicoafectivos lógicos del desarraigo, un desmejoramiento real de las condiciones de vida del grupo afectado: eventualmente puede pasar de ser propietario a arrendatario y se incurre en nuevos gastos (por transporte, educación, etc.).

la difusa- a las situaciones de pobreza y de creciente desempleo que se vive en Medellín. Sin embargo, no dejando de reconocer el peso que estos factores en el clima de violencia, es imprescindible dejar por sentado que en este ensayo partimos de la hipótesis del origen multicausal de la(s) violencia(s), esto es, son muchos los hechos que han interactuado y que han modificado su peso en diferentes coyunturas, de hecho, la crisis y consecuentemente la violencia, las entendemos en función de factores tales como:

- La inequitativa distribución de la riqueza y, consecuentemente, niveles elevados de pobreza.
- Por supuesto, la crisis de la producción industrial de la ciudad, con su secuelas de desempleo, subempleo e informalidad.
- La inequidad en la distribución de los ingresos.
- Escaso reconocimiento de las instituciones gubernamentales (pérdida de legitimidad).
- Los relativamente elevados índices de corrupción.
- Las inequidades sociales y culturales que se reflejan en el desigual acceso a la educación (por cobertura y calidad), a la salud, al espacio público.
- Desarticulación de la sociedad civil.
- La ausencia de procesos participativos.

Ante este conjunto de factores que se constituyen en verdaderas ollas a presión sobre el Estado y la Municipalidad, se han producido respuestas muy puntuales y dispersas, afectando problemas específicos, pero nunca articulando un proyecto democrático y global, cimentado en consensos entre los diversos actores sociales comprometidos, es decir, en fundamentado en un real proyecto ciudadano.

Gestionar la crisis urbana no es un problema de simple “buena voluntad”. Se requiere que la sociedad se dote de herramientas jurídicas, sociales y económicas

–fortalecimiento de la justicia y de todo un sistema de derechos civiles y económicos y de garantías sociales- apropiadas por los ciudadanos y convertidas sus referentes sociales.

Puede afirmarse que la palabra *seguridad* se torna vacía si no se le asocia con progreso y desarrollo, pero estos no en términos de crecimiento material y físico, sino con el bienestar individual y colectivo.

De allí que exista, de manera cada vez más creciente, la inquietud por la formulación de un PACTO SOCIAL DEMOCRÁTICO, la construcción de un proyecto participativo de ciudad.

Es claro entonces que, para muchos la violencia se *justifica* en tanto que son las reacciones normales contra condiciones intolerables de vida y de trabajo. Para otros, se *justifica* por el valor estratégico y táctico de poner en evidencia la incapacidad y el abandono del Estado y de la sociedad en su conjunto sobre un grueso de pobladores. Resaltemos que esta última justificación es sobredimensionada particularmente por la población más joven –entre 14 y 25 años- de los barrios marginales de la ciudad, los mismos que se adscriben a la violencia en carácter de víctimas y de victimarios.

Así se mezclan, combinan, se diferencian y se integran, apropiándose y segmentando la ciudad: migrantes campesinos, desplazados, jóvenes pandilleros, subversivos y paramilitares.

“La violencia tiene múltiples expresiones que no excluyen, pero si sobrepasan, la dimensión política” decía la Comisión de Estudios sobre la Violencia (Sánchez,

1987:17)⁵ y destacaba que la denominada violencia difusa, aquella que proviene del vecino, del ladrón, de la riña callejera, la que se origina en el alcohol, etc., es la que produce más muertes en el país, muy por encima de las estadísticas derivadas del conflicto político

“... los colombianos se matan más por razones de la calidad de sus vidas y de sus relaciones sociales que por lograr el acceso al control del Estado” (Ibídem: 27.

Sin embargo, desde mi perspectiva el conflicto armado sí es el más importante, teniendo en cuenta sus impactos sociales, los dispositivos de poder que pone en marcha, el arraigo social que implica y su participación creciente en el problema del narcotráfico.

Ahora bien, y a riesgo de ser reiterativo, diré que una *sociedad no es más enferma* por el hecho de poseer muchos problemas y conflictos, sino por no ser incapaz de dotarse de los mecanismos para gestionar esos problemas.

En este orden de ideas, cuando la *autoridad* –el Estado actuando a través de la municipalidad y los organismos de control- es incapaz de mediar en los conflictos de sus pobladores y de proveer un marco adecuado de seguridad para todos, pierde la legitimidad y se encuentra con que ese espacio no solo le es disputado sino copado por otros actores. Esta es la situación que vamos a encontrar en los barrios periféricos de la ciudad con las bandas delincuenciales armadas en un comienzo y luego con las autodefensas (paramilitares) y con las milicias ligadas a los grupos subversivos.

⁵ Comisión de 9 académicos y un exmilitar, constituida en 1987 a solicitud del Ministro de Gobierno Fernando Cepeda Ulloa, con el fin de proponer al Gobierno central una serie de estrategias para enfrentar el fenómeno de violencia en todo el territorio nacional.

Inmerso en este trabajo se puede percibir que existe un lugar común para todos los que estudian las violencias, es un espíritu o afán por las taxonomías. No tengo interés en ser diferente y, por el contrario, considero que ello nos lleva a un ahorro de tiempo y de explicaciones.

Parto de reconocer una violencia que puede llamarse civil, o como se le ha denominado recientemente, violencia difusa y que se refiere a aquella que rebasa la simple agresividad y que se afirma, bien en la negación de la diferencia social, como la que se ejerce contra prostitutas y homosexuales por ejemplo, bien en el mantenimiento de un rígido y arcaico orden, como es el caso de la violencia intrafamiliar, o bien, en la lucha por recursos escasos y la supervivencia, como la que ejerce el ladrón.

Igualmente, existe una violencia que puedo llamar mafiosa, para referirme a la ejercida por grupos organizados ubicados por fuera de la legalidad y que son funcionales al ejercicio de un para-poder, como es el caso de las bandas sicariales.

Y finalmente existe una violencia referida al Estado, como garante de consumos colectivos y como aparato de poder político, tal es el caso de los grupos subversivos y milicianos y en alguna medida –solo como caso especial- el paramilitarismo.

De esta manera, es evidente que la violencia ha penetrado cada poro del tejido social, dejando su impronta grabada en la memoria de cada individuo de nuestra sociedad: Considero difícil que alguno de los habitantes de Medellín no tenga una historia violenta que contar: referida a un familiar, un vecino, un amigo o simplemente un compañero de trabajo. Esto implica, de suyo, que estamos ante un panorama sumamente complejo.

Es tal el nivel de *angustia de nuestros ciudadanos*, que la reflexión que se hace en torno a la violencia exige que se planteen opciones “milagrosas”, que paren el calvario de muertes en la ciudad. Quizás ello explica que la estrategia recurrente de quienes han participado en los llamados procesos de paz, siempre se haya orientado a desmontar los aparatos de violencia, colocando en el imaginario colectivo que ese es el contenido de la paz: la negación de la guerra. Pero la paz es algo más compleja.

Se hace imprescindible establecer algunos de los lineamientos teóricos que guiarán este documento. Cuando me refiero a *fronteras* no me estoy refiriendo simplemente a los límites, pues estos sitúan solamente territorios, es decir, son unas líneas que determinan el punto final del alcance territorial y administrativo de un sistema y, por supuesto, suponen el inicio de otro territorio. Me refiero a que, además del espacio físico, el centro de reflexión lo ubico en el entramado de valores y relaciones que se establecen en él. Quiero pensar la ciudad desde una perspectiva más general, como el escenario que es, mirando la localización espacial o adscripción territorial de los diferentes grupos sociales. Esto significa que, al igual que la reconocida Escuela de Chicago del despuntar el siglo XX en USA, pero por supuesto reconociendo las diferencias con este enfoque ya que asumo una mirada histórica, quiero establecer el contenido de las relaciones de competición y colaboración, de concentración y segregación espacial, de relaciones de conflicto, que se producen en ese escenario urbano.

La identidad es un artificio -no por ello menos real- una construcción cultural en la que entran en juego elecciones y preferencias que le dan sentido a la vida cotidiana, que está determinada por vínculos históricos que, por ejemplo, aferran el sujeto a un espacio y que se define a partir de las fronteras⁶. Las fronteras se constituyen en un orden para ser aprehendido por el ciudadano, por el poblador,

⁶Las fronteras son siempre, más que una entidad físico territorial, fronteras de memoria, desde las cuales el sujeto social identifica los lugares y los no-lugares, como los definió Marc Augè.

que le indica lo que debe ser mirado y cómo mirarlo. Es apenas obvio que los violentos refuerzan este sentido de frontera.

El territorio, de hecho, es primero algo físico, pero también es extensión mental, es algo vivido y marcado, reconocido en su simbología –con códigos de representación colectiva- Por tanto, posee umbrales a partir de los cuales el sujeto ya no se reconoce. Armando Silva (1992) lo resume en una frase: “camino marcados, marcan a sus usuarios”.

Lo importante, en consecuencia, para este ensayo son los tipos de relaciones que se establecen en los territorios, enfatizando en los *efectos de frontera*, en las relaciones o comportamientos –que corrientemente son de “choque”- resultantes de la coexistencia de sistemas que se conforman en ambos márgenes del límite. Parte de los actores sociales y de los problemas que les plantea la utilización del espacio, problemas que a su vez son indicadores de los problemas sociales más generales, pero que en la apropiación del espacio, definen unas marcas territoriales⁷ que se inscriben en la vida cotidiana, en la vida concreta, o en lo que la Escuela de Frankfurt denominó los mundos de la vida⁸ y que se expresan en los usos, costumbres, valores, giros idiomáticos. Aquí los individuos definen la “realidad”, lo que vale la pena, lo que está bien, quien es el amigo y el enemigo, etc. así surge la identidad, la pertenencia y simultáneamente surge su opuesto que es el desarraigo. Se reconocen los espacios, se definen las historias, así el territorio es un espacio vivido, donde los actores anclan sus recuerdos y vivencias. La identidad es una configuración significativa, está hecha de representaciones que dotan a los individuos de una experiencia y de una guía lógica que los orienta.

⁷ Utilizo la expresión de marcas territoriales, así como la de bordes, en el sentido planteado por Kevin Lynch en su famoso texto LA IMAGEN DE LA CIUDAD, Ed. Infinito, Buenos Aires, Argentina (1959).

⁸ El contenido de este concepto de “mundo de la vida” es la polémica de Habermas con G. H. Mead y A. Schutz. Véanse los textos de Habermas TEORÍA DE LA ACCIÓN COMUNICATIVA (1989) y TEXTOS Y CONTEXTOS (1996) por ejemplo.

Los lugares existen porque son dispositivos de memoria, se puede decir alguna cosa de ellos.

Las fronteras, históricamente han sido espacios de confrontación, de afirmación de poderes, de reconocimiento de lo idéntico y de lo diferente, que se reafirma en el día a día.

El barrio se constituye en los lugares de memoria, que evocan la identidad.

Trataré de hacer una lectura diferencial de la ciudad, atendiendo a las particularidades de los habitantes –por condiciones socioeconómicas, generacionales y contextuales- así, serán las vinculaciones sociales específicas las que darán vida a las formas espaciales. De hecho, se trata de leer las fracturas producidas en la identidad que provee el conjunto urbano y el espacio barrial y que se expresan en mecanismos violentos. Aquí los entornos barriales se convierten en refuerzos de estructuras motivacionales generadoras de nuevas identidades. Se marcan, se organizan significativamente los espacios para identificar “nuestro grupo”, hay pues una voluntad explícita de producir identidad, de homogeneidad cualitativa que, finalmente, fracciona la ciudad.

De allí que otro concepto fundamental lo constituya el de *Red Social*, entendido como el sistema mediante el cual los individuos y grupos humanos establecen relaciones directas o mediadas, adjudican jerarquías a los integrantes de la red y establecen interacciones tendientes a producir y reproducir sus condiciones de vida. Cobra especial importancia, la apreciación de Larissa Lomnitz (2002:179-190) cuando pone en primer plano la reciprocidad como fundamento de las redes formadas en las poblaciones marginales o pobres.

Las redes asociativas construidas alrededor de las reivindicaciones barriales siempre han planteado el problema del Poder Local. Anudado a este aspecto

veremos en este escrito, las formas como los actores armados han afectado este ejercicio y organización comunitaria.

En esta perspectiva, consideramos que el anverso del ejercicio de una ciudadanía plena –entendida esta como una cierta relación entre Estado y sociedad sobre la base de la integración social y política de la sociedad- es la exclusión social y política de grandes sectores sociales, proceso que es muy corriente en una sociedad como la de Medellín. Como respuestas a estas exclusiones, en los barrios periféricos que las sufren, los pobladores elaboran estrategias organizativas, tales como grupos de autodefensa, milicias⁹, e incluso, bandas y combos. Si se quiere, se podría decir, que se trataría de una “identidad social por diferenciación que tiene una base territorial”, que es su barrio.

Por ello, el concepto de *exclusión* al que hago referencia aquí significa la no incorporación de una parte de pobladores a la comunidad social y política, lo que trae como consecuencia el que se les nieguen sus derechos esenciales de ciudadanos, esto es, su igual tratamiento ante la ley, el acceso a la riqueza, el respeto por su propiedad y por su vida, el libre disfrute de los servicios públicos y sociales, etc.

El territorio es temporalizado y apropiado en manera personal y colectivamente, en forma simultánea, constituyéndose en un principio de racionalización –define los límites de “su ciudad”- que agrega y fragmenta.

De otra parte, no puedo desconocer el papel de *la pobreza* en la determinación de los niveles de violencia aunque, como anotaré más adelante, constituye un acto de

⁹ Los grupos milicianos son grupos urbanos proclives a la insurgencia, tienen fuerte asiento local y estrechos vínculos con la comunidad, lo que hace que tengan un conocimiento profundo de los barrios y territorios en donde operan. La masificación de su estructura implicó que se vincularan muchos jóvenes de la ciudad, que venían de bandas y pandillas barriales, que estuvieron incluso al servicio del narcotráfico. Se les dio entrenamiento militar y se puede decir que se descuidó su formación política –esto los hizo muy vulnerables.

discriminación el equiparar o asumir como términos equivalentes la violencia y la pobreza. He tomado el concepto cepalino de pobreza, cuando se refiere a que es un concepto histórico y multidimensional que abarca, de un lado, un síndrome situacional asociado a circunstancias de necesidades materiales como desnutrición, infraconsumo, bajos niveles educativos, inserción inestable en la producción o dentro de sectores atrasados de la misma, condiciones habitacionales y sanitarias precarias; y de otro lado, a necesidades también básicas aunque de naturaleza no material como autorrealización personal, libertad, derechos humanos y participación, para solo mencionar algunas. (CEPAL: 1985)

Ya la sociología, lo mismo que la conflictología¹⁰ ha indicado que, entre las condiciones capaces de predisponer a un grupo o categoría social a la violencia colectiva, se encuentran:

- “Las condiciones estructurales, como las condiciones de vida; conviene incluir aquí las variables socioeconómicas y demográficas: subalimentación, superpoblación, existencia en la sociedad de subgrupos con grandes diferencias de las condiciones de vida;
- “la tensión estructural, como (...) la frustración continua de las esperanzas y aspiraciones sociales de este grupo, la inexistencia de estructuras que permitan la expresión colectiva de las insatisfacciones;
- “la ausencia relativa de controles sociales y las reducidas expectativas de sanciones sociales.” (Touzard, 1981: 71-72)

Por todo lo anterior, es que afirmo que tenemos que auscultar tres claves para entender el papel de la violencia en la ciudad de Medellín: La fuerza –insumo

¹⁰ Palabra ideada por el español Eduardo Vinyamata, para referirse a la eventual construcción de una nueva ciencia que tiene que ver con el estudio de los conflictos y de los mecanismos de resolución de conflictos.

indispensable del control territorial- el riesgo –ligado a las exclusiones ya a la pobreza- y la diversidad –para comprender y aceptar al diferente.

Medellín que es el caso que nos ocupa, se constituye en un típico caso de *violencia social y política*, entendida como aquella cuyas motivaciones emanan de conflictos económicos, territoriales y socioculturales –y podríamos agregar, de conflictos étnicos- Los actores son múltiples, venidos desde la esfera gubernamental y de agentes particulares, aquellos, actuando a través de los organismos de control y vigilancia, haciendo “limpieza social” y estos, actuando a través de bandas y milicias, estableciendo micropoderes sobre los territorios barriales.

La denominada violencia por *limpieza social* que será practicada en Medellín por todos los grupos armados –de derecha e izquierda- esta fundamentada en una tarea de profilaxis social barrial –limpiar las “inmundicias humanas”: prostitutas, niños de la calle, homosexuales, delincuentes comunes, drogadictos, alcohólicos, vagos y marginados- convirtiéndose, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en los crímenes más execrables dadas las condiciones de absoluta indefensión de la víctima y que realmente, no constituyen de suyo un peligro social.

Pero hay que ser cauto, al hablar de la violencia política, en la medida en que la lucha por el control del poder político del Estado se presenta difusa en el accionar de los actores que por definición son políticos: las milicias y los paramilitares, como veremos, no le disputan, en términos reales, este poder al Estado, pues de hecho, este ha dejado “vacíos”, esta ausente, no se “siente” en las zonas en donde aquellos imponen su poder, más bien podríamos decir que la estrategia es la de copar los espacios que el Estado no ha llenado. La debilidad institucional del Estado, es el que permite la aparición de estos actores y la fragmentación del poder. Pero igualmente es difícil entender, en lo militar propiamente, esa disputa,

pues la constante que nos muestra ese control por los nuevos actores armados no se diferencia del que establecen las bandas delincuenciales: el boleteo, la intimidación, la extorsión y el secuestro se convierten las formas propias de lograr su subsistencia y de mostrar su poder. La intimidación, el terror y la eliminación física permiten los resultados del “dominio y control territorial”, generando de paso una gran descomposición del tejido social barrial.

Lo paradójico de la situación es que el *miedo* actúa como un fuerte elemento de integración social. Las bandas, combos, milicianos, paramilitares desarrollan sus estrategias de terror e intimidación y arrojan bajo su protección a quienes se encuentran dentro de sus territorios: protección brindada, fidelidad exigida.

Las representaciones sociales sobre la violencia y el conflicto urbano han llevado a que se exijan medidas de distintos órdenes: privilegiando las salidas represivas o las salidas preventivas. La discusión se plantea en torno a los enfoques que guían las prácticas de control social. Si el control lo entendemos desde un enfoque político, entonces el énfasis se orienta a *someter al contrario o desviado, al que se resiste a la autoridad*, a través del ejercicio coercitivo y represivo (autoridad, poder, represión y Estado serán las categorías interpretativas). Este enfoque, tan común en América Latina, a conducido a la progresiva *judicialización* de toda protesta social.

Pero si el control social es entendido desde un enfoque sociológico, en donde el presunto *desviado* es entendido como quien no ha internalizado las conductas y actitudes normatizadas, los valores predominantes y no se identifica con la ley, es decir, sería un sujeto anómico producto de las condiciones de pobreza, su escaso nivel educativo y presumiblemente por su origen de emigrante rural. En este caso se impone un tratamiento no simplemente represivo, sino también preventivo (Integración, adaptación social y socialización serían en este caso las categorías interpretativas).

Por supuesto y para terminar con este nivel introductorio, son muchas las preguntas que todos nos hacemos cuando iniciamos una reflexión sobre una ciudad como Medellín: ¿por qué Medellín, cuál es su peculiaridad? ¿Por qué tanto desangre? ¿Por qué, si la idea de los grupos insurgentes era la de la urbanización de la guerra, por qué comenzaron por aquí, en las calles de Medellín? ¿Por qué dicen que hay muchachos armados por todos lados, Quién los armó? ¿Por qué se estigmatiza a las comunas? ¿Por qué FARC, ELN y Auc crecen y se refuerzan en este territorio urbano? ¿Qué hacen las autoridades y la administración de la Ciudad? ¿Es Medellín un laboratorio de guerra?

Coincido con la apreciación, también muy general, de que no existe respuestas satisfactorias y todo lo que se diga constituye solo aproximaciones e hipótesis. Incluso, contrario a lo que muchos afirman de que el termómetro del país pasa por esta ciudad, aún está por demostrar que Medellín sea una ciudad estratégica a nivel geopolítico¹¹. Sin embargo, una vez se identifican las causas llamadas estructurales o crónicas de la violencia, quizás lo más particular de nuestra urbanización y que sería una causa coyuntural o dinámica, es ese proceso de incubación de la violencia que se produjo con la presencia del narcotráfico.

MEDELLÍN: EL PROCESO DE CONFIGURACIÓN SOCIOESPACIAL

"Medellín, una ciudad dividida por un muro, ahora más real que imaginario, que separa y excluye a los que luchan por sobrevivirle al hambre o la violencia y los que pueden darse

¹¹ Para algunos, el hecho de ser una ciudad bien ubicada, relativamente desarrollada en términos industriales, comerciales y de servicios, con vías de acceso y llegada bien definidas que facilitan el acceso a los puertos y a los ríos como El Magdalena, Atrato y Cauca, además de su geografía y climas, se constituyen en suficientes atractivos estratégicos para los actores armados. Habría un factor detonante: esta ciudad fue asiento de la más grande organización delictiva del narcotráfico, el Cartel de Medellín, comandado por Pablo Escobar. Su ubicación sería una trinchera estratégica para la circulación de armas y narcóticos.

el lujo de vivir en unidades cerradas, todos los días más herméticas en seguridad y también negadas a sentir el dolor y oír los llamados de auxilio y solidaridad de estos otros que son tan antioqueños y medellinenses como nosotros". Testimonio de un habitante de la ciudad... (Patrialibre.org, 2002)

Medellín actual es una ciudad sitiada por el accionar de bandas de delincuencia organizada, por grupos milicianos y por estructuras paramilitares y de autodefensa. Esto significa que las grandes dimensiones del conflicto urbano sean el terrorismo, el tráfico de armas y de narcóticos, el crimen selectivo y el contrabando, todas ellas amenazando constantemente la seguridad de los habitantes y, por ende, su calidad de vida, pero también poniendo en entredicho la seguridad del Estado mismo y cuestionando su legitimidad.

Por supuesto existen otras manifestaciones de conflictividad urbana que, pese a afectar la convivencia social, no ponen en jaque al Estado y la Institucionalidad, como son los casos de la violencia intrafamiliar, las violaciones al código de tránsito, la violencia de género, etc.

No sobra decir que todos los procesos de conflicto, violencia y cooperación negociada tienen como escenario a una ciudad que enfrenta una profunda crisis social, económica y político institucional. Para contextualizar estos procesos considero útil una caracterización, aunque muy breve, de lo que ha sido la configuración histórica y social de Medellín, sus transformaciones físicas y sociales más relevantes y que inciden en las formas de enfrentamiento social que se viven actualmente en la Ciudad.

Es fácil definir el contexto dentro del cual se genera el desarrollo urbanístico y social de Medellín: es un proceso de expansión, dentro del corredor de una larga y

estrecha franja – 54 por 13 Kilómetros – denominada el Valle de Aburrá y que se encuentra bañada por un río principal, el Medellín o Porce, el mismo que recibe aproximadamente una docena de afluentes de caudal medio, presentando un panorama de excelente dotación hidráulica. La ciudad, hasta mediados del siglo XX, crecía muy lentamente y su tendencia era de oriente a occidente. Como expresión del control ideológico cultural español aparecían las Iglesias, que estructuran a su alrededor los primeros servicios Vg. sirvieron de cementerio, y se distribuyeron a escala en la incipiente ciudad, nucleando los barrios que asumirán el nombre de la respectiva parroquia.

El censo del 1930 arrojó una población de 130.000 habitantes en la ciudad y en 1938 la población ascendió a 168.300 creciendo a un ritmo anual del 3.5%. A partir de 1951, la situación comienza a manifestarse explosiva, pues ya la población se duplica llegando a 358.189 y creciendo a un ritmo del 5.88% para constituir el 22.81% de la población total departamental y con la peculiaridad de ser una fuente receptora de población campesina emigrante pues sólo 1 de cada 3 habitantes son nacidos en Medellín.

Esto quiere decir, que si bien el proceso de crecimiento de la ciudad se inició esencialmente en los años 30, es en la década del 50 que se hace intensiva, coincidiendo con el período que se conoce en la historia de Colombia como la Violencia.

La migración, como hecho contundente desde los años 30, transformó lo que hasta entonces se conoció como vida urbana. Y la forma particular como concordaron en el tiempo y el espacio los fenómenos de urbanización e industrialización marcaron los niveles de pobreza y violencia urbanas.

En un proceso simultáneo, igualmente, en Medellín se concentró una parte muy importante del desarrollo industrial y por ello se le llamó la “la ciudad industrial”

comercial y bancaria del país, sirviendo, por tanto, de asiento para una cantidad apreciable de oficinas, talleres, y centros internacionales, los que a su vez dinamizan el crecimiento urbano y actúan como factores de atracción para otras capitales y para la población emigrante. Según el primer censo industrial, hecho en 1945, Medellín poseía un total de 789 industrias y ocupaba 23.422 personas, de allí que no puede extrañar que esta ciudad fuera el lugar donde naciera y se asentara la Asociación Nacional de Industriales –ANDI- desde 1945.

Esta dinámica industrial produjo necesariamente el crecimiento urbano en otras direcciones. Así en la década de 1920 se cruza el río por la calle San Juan y se enfatizan Belén y la América como embriones de la ciudad occidental; también surgen en la parte Noroccidental los barrios Villa Hermosa, Manrique Central, Campo Valdés, Pérez Triana (hoy San Pedro), Belén, Palermo, y hacia fines de la década se formaron Santa Cruz, Germanía (hoy La Frontera), La Francia, Villa Guadalupe, Moscú, La Rosa, Carambolas, (hoy San José la Cima), San Antonio, Villa Tina, Betania, Sofía, Apolo, la Iguana, La Soledad, y Castilla.

Ese crecimiento, duplicándose en 10 años, muestra no sólo el enganche urbano sino también la presión poblacional. Igualmente, contribuye a consolidar lo anterior el proceso de crecimiento del área construida pues entre 1908 y 1938 fue del 281.5%.

Conviene señalar que en 1938, el Concejo Municipal de Medellín dictó un acuerdo que suprimió los corregimientos de Belén, la América, Guayabal, Robledo y Berlín en la franja occidental del río – hoy comuna noroccidental- y los convierte en barrios urbanos, lo cual también es indicativo del crecimiento que vivió la ciudad.

Es necesario mencionar un proceso que ya asomaba: La invasión de terrenos, que de paso denotó la gran vulnerabilidad y exclusión sociales y se constituyó en un factor estructurante en la configuración de la ciudad y de sus barrios:

La presión poblacional sobre la ciudad, producto de la migración campesina, se incrementó fuertemente luego de la década del 50's. El censo de 1964, indicó una población de 772.887 habitantes, constituyéndose en el 31.19% de la población total departamental y con una tasa de crecimiento geométrico 1951/64 de 6.9% - muy superior a la del Departamento que era de 3.7%- que coloca en el centro de la problemática la migración campesina a la ciudad. Esto se manifestó en un peculiar modelo de urbanización que yo denominaría “tugurización¹² de la ciudad”, para referirnos a urbanizaciones no controladas, nacidas casi siempre de invasión de terrenos, constituidas en la estrategia asumida por los sectores pauperizados al no poder acceder al mercado público y privado de la tierra urbana. Estas urbanizaciones se articularon horizontalmente –por un crecimiento ilegal y desordenado de la malla urbana- y de manera no orgánica, sino “disfuncional” como fuentes de patologías y rebeldía, con el resto de la ciudad.

Las décadas de los años 50's y 60's en Medellín son las típicas de la migración y ocupación territorial periféricas. Se consolidan las comunas Nororiental y Centro-oriental con la aparición de barrios como San José La Cima, La Frontera, La Francia, Manrique Oriental, Santa Cruz¹³, Santo Domingo Sabio, Popular I y II, Moscú, La Isla, Villa Guadalupe, María Cano, Carambolas, La Avanzada, Carpinelo, Villa Lillian, Villa Turbay, Villa Tina, El Vergel, Isaac Gaviria, El Edén, Llanaditas y Versailles¹⁴.

¹² Las poblaciones tuguriales de Colombia, tiene el mismo contenido social de las “Callampas” de Chile, de las “Favelas” de Brasil, de las “Villas Miserias” de Argentina y de los “Rancheríos” de Perú.

¹³ Estos son barrios de “Urbanización Pirata”, es decir, barrios que no son invasiones sino que su sistema de loteo no sigue las normas reguladoras de planificación determinadas por la Administración Municipal: como espacios definidos para las vías, aceras, servicios comunales y públicos, etc.

¹⁴ Estos son barrios de invasión que se ubican en esa época por fuera del perímetro urbano de la ciudad establecido por el Concejo Municipal.

La época se encuentra marcada por dos tendencias: la invasión de terrenos de propiedad privada y pública –que es dominante en la zona Nororiental de la ciudad- y la urbanización pirata, que construye por fuera de las normas planificadoras –que es dominante en la zona Noroccidental.

También en las décadas de los años 50's y 60's se formaron los barrios piratas de Belalcázar, San Martín, Kennedy y El Diamante en la comuna Noroccidental y en la década de los 80's esta comuna, vio nacer los barrios de invasión de El Picacho, Picachito, El Progreso, Efe Gómez, San Nicolás y París entre otros.

Se comienzan a construir los instantes claves de la segregación socioespacial: La precariedad de los asentamientos mismos, en terrenos de alto riesgo y con el manejo inadecuado de aguas, desechos y suelos, unido al hacinamiento propio del déficit habitacional que aparece acompañado de factores como la desnutrición infantil y la insalubridad; son las características de los nuevos barrios.

Pero también la segregación económica se perfila en estos nuevos barrios: la baja cobertura del empleo industrial urbano impide el acceso a muchos pobladores migrantes que tiene que recurrir a subsistir basados en la informalidad. Aspecto este que acompañará, como fruto del cambio de usos, la pérdida de significación y el deterioro del centro histórico

Los conflictos y tensiones de semejantes procesos, interpretados como “caos, desorden y violación de la ley” condujeron al uso de la fuerza y al refuerzo de la exclusión.

Se produce así, como lo señala Touzard (1981:67) en el plano de la percepción, un efecto discriminante, independientemente de todo conflicto entre los grupos .

Las luchas urbanas de esta época fueron luchas por la inclusión en la estructura espacial, fueron relaciones solidarias y simultáneamente de oposición en torno al reconocimiento del derecho a la ciudad, fueron luchas por el reconocimiento social, político, cultural y económico, en pocas palabras, fueron luchas por la existencia misma como ciudadanos.

Y la transformación más interesante se anudó en la redefinición de los viejos actores urbanos en relación con los “nuevos habitantes de la ciudad”, planteando reflexiones en torno a los derechos mismos, a la forma de relacionarse los ciudadanos con la administración de la ciudad y a la aceptación de los diferentes y de la pluriculturalidad

Ya para el año de 1973, la población de la ciudad había ascendido a 1.151.762 habitantes que equivalían al 39% de la población departamental y su tasa de crecimiento, aunque descendía comparada con el decenio anterior, seguía siendo elevada, llegando al 4.6% entre 1964 /1979, mientras la del Departamento era de solo el 2.5%.

Las formas de apropiación espacial que desarrollan los sectores populares y su peculiar forma de insertarse en el mundo citadino, se constituyeron en estas décadas en la forma de interpretar el desarrollo y la conflictividad urbanos. Las luchas y los movimientos sociales urbanos que emergieron con inusitada fuerza en esa época, confrontando la lógica del Estado y sus aparatos de planificación, permitieron vislumbrar un “nuevo urbanismo”, más autogestionarios y de base barrial, por tanto, menos salvaje.

Sin desconocer que las carencias, la forma de utilizar el espacio y el habitar un entorno, se constituyen en un primer momento en factores de unidad solidaria, es preciso indicar que al proceder de diferentes sitios, difícilmente podría darse una verdadera integración social en estos sectores populares y, por el contrario, las

relaciones de desconocimiento, de prevención y de desconfianza se tornaron, paulatinamente, en dominantes.

“Informalidad, ilegalidad y pobreza unidos a una precaria gestión urbana, constituyen la urdimbre sobre la cual se van profundizando las rupturas y las fracturas del tejido social, creando situaciones favorables al uso de la fuerza y la violencia para resolver los problemas de la convivencia colectiva” (Alcaldía de Medellín, 1994:11)

El maremagno de migrantes dio lugar a la formación de ***una ciudad dentro de la ciudad***, pero no dentro del espíritu de los planificadores –que soñaban en una construcción de ciudad funcional, a la manera de los “diseños” de Le Corbusier, en donde se reducían los recorridos y los tiempos desde los lugares del alojamiento hasta los del trabajo- sino *una ciudad ilegal construida por fuera del perímetro urbano* definido por la Administración y que, por tanto, además de violentar en muchos casos el fundamento jurídico de la propiedad privada, tampoco se sometía a los requerimientos institucionales de construcción definidos en las oficinas de Planeación.

Las dinámicas urbanas de los nuevos pobladores fueron las típicas de la autoconstrucción, las luchas por la posesión de los terrenos que ocuparon y las demandas crecientes –y soluciones ilegales- por energía, agua, luz y alcantarillado. En medio de todo esto, surgieron organizaciones comunitarias de orden instrumental pero importantes en la construcción física y urbanística barrial como fueron las Juntas de Acción Comunal

Para complejizar más el panorama, tenemos que insistir en que sí el control judicial es débil y corrupto, las demandas por derechos se comienzan a alejar del escenario de lo público y estatal y comienzan a transitar por la gestión desde las formas privadas.

Adicionalmente, la articulación de los pobladores de esta nueva ciudad con la economía urbana, se hacía desde la informalidad y de lo que los sociólogos denominaban patologías sociales¹⁵.

Se enfrentan y colocan una a otra, lo que algún autor denominó: la ciudad de vidrio y luz, frente a la ciudad de cartón y lata.

Los espacios verdes y florecidos de las montañas circundantes –a Medellín se le conoce también como “la ciudad de las flores” y como “la ciudad de la eterna primavera”- de pronto se vieron teñidos con ladrillos, hojas de zinc y tabloncillos de todos los colores con los que los nuevos habitantes pintaron sus remedos de ranchos campesinos. Las montañas se perdieron entre construcciones con desechos.

Estos pobladores tejieron redes solidarias. Primero, para la defensa y posesión de los terrenos, constituida en una tarea ya no individual sino colectiva, para lo cual se organizaron y lucharon contra casatenientes y policías. Luego, para la autoconstrucción de la vivienda, que se hizo en muchos casos con el apoyo de los vecinos llegados antes. Y finalmente, la necesidad convocó la ayuda mutua y la coordinación, a través de mingas, para proveer los servicios básicos –vías, alcantarillado, agua, luz- que la municipalidad no otorgaba a *los ilegales*.

En este primer momento de construcción de redes sociales, de consolidación del tejido social en la periferia de Medellín, la Iglesia jugó un papel importante. Emergió con fuerza la figura de Cura Cívico¹⁶, el cura ya no ligado a lo sacro sino

¹⁵ El imaginario de los nuevos pobladores construyó la nueva ciudad y ello estaba tan acentuado que incluso cuando estos pobladores salían a realizar su economía del “rebusque” decían que “iban para Medellín”, es decir, sentían que salían de su propia ciudad para otra.

¹⁶ En un estudio de opinión realizado por el Centro de Estudios de Opinión (CEO) en 1985, los pobladores pobres de la ciudad señalaron que la figura más recordada por ellos y que mayor influencia tenía era la del Sacerdote. Colocándose por encima de deportistas, de maestros, incluso de otros vecinos.

a lo cívico. Era él el que lideraba los convites para la construcción de las obras de servicios colectivos, el que luchaba por la consecución de apoyos con las organizaciones privadas y la Administración Municipal misma, era el que defendía el barrio, el que recaudaba los exiguos fondos, el que proveía mercados a los más necesitados, el que convocaba a las asambleas de padres y conformaba los grupos juveniles y artísticos, etc.

Podría incluso pensarse que la vitalidad de esta “nueva ciudad” era mayor que la de la “ciudad tradicional y formal”. Pero los fuertes y rígidos dispositivos de discriminación y de exclusión corroyeron hasta destruir totalmente el tejido social de todo el conjunto urbano. Ya las instituciones simbólicas y socializadoras, las personas representativas, los valores, lo mismo que los espacios públicos, adquirieron significados distintos para los habitantes de estas dos ciudades que se superponen.

Las condiciones de estos barrios, sobre todo en los barrios piratas, se superan en buena medida por el trabajo solidario comunitario y por los nexos clientelistas que establecen los directorios políticos tradicionales con los pobladores marginales y que obligan a la administración municipal¹⁷ a realizar allí algunas obras de infraestructura –construcción de vías de acceso, dotación de servicios públicos y de equipamiento urbano como establecimientos educativos, de salud y recreación- También aparecieron instituciones caritativas que actuaron como paliativos de esas condiciones de abandono, tales como “Caritas” –ligada a la Iglesia Católica- y “Futuro para la Niñez”.

¹⁷ Definitivamente, el Estado y la Administración Municipal siempre han tenido una relativa eficacia en el desarrollo de programas de inversión en obras públicas y servicios en las diferentes zonas de Medellín, pero han fracasado en dos frentes: de un lado, en constituirse como organismos de control legal y de administración de justicia, dados los altos niveles de corrupción e impunidad con la que actúan policía, F2, SIJIN y fiscalía –lo que les resta legitimidad como fuerzas mediadoras de conflictos- y, de otro lado, en la inversión social y el estímulo a la creación de fuentes de empleo, viviendas de buena calidad y a precios accesibles para todos, más impulso a programas lúdicos y culturales.

En los barrios de invasión y piratas se produjo, y se sigue produciendo, un constreñimiento de la forma espacial afectando las posibilidades de configuración del espacio público y la calidad de vida barrial, así por ejemplo, la disposición de las calles son irregulares y estrechas y hay una peatonalización de los senderos barriales. Estas restricciones son el resultado de la presión del uso para vivienda. La estrechez de la calle, o su ausencia absoluta, conlleva a eventuales situaciones de conflicto interno, como tensión entre la apropiación pública para desarrollar actividades para las cuales no han sido diseñadas –deporte por ejemplo, o juegos infantiles- y un sentido de lo privado como el acceso a las viviendas. Los propietarios pueden sentir afectado su sentido de propiedad y recurre a la violencia y amenaza de la fuerza para subsanar ese “abuso”.

Hacia mediados de la década del 80, era evidente que el ritmo de urbanización de la ciudad había descendido y que en buena parte de Medellín aquellos barrios periféricos tomaban nuevo aspecto: las calles se presentaron en la mayoría ya pavimentadas, la dotación de servicios públicos domiciliarios y comunitarios era visibles, las viviendas se reconstruían ya con materiales –adobe y cemento

Ahora bien, en 1980, y sirviéndonos como prefiguración de la problemática actual, se hizo una encuesta de opinión en Medellín (Centro de Estudios de Opinión) que mostraba que los principales problemas de la ciudad eran en su orden: el desempleo (25.6% de las opiniones), la inseguridad (18%), la falta de vivienda (14.5%), el transporte (13%) y por supuesto apareció el rechazo al deterioro ecológico general, la contaminación del río, la destrucción de áreas verdes, la falta de aseo en la ciudad, las deficiencias en salud, educación, vivienda y otros servicios, la congestión vial, la escasa vida cultural y la violencia. Esta situación, era padecida de manera dramática por los pobladores de las comunas nororiental y noroccidental de la ciudad, las mismas que como veremos más adelante serán caldo de cultivo para el accionar de los diferentes actores violentos.

Puede afirmarse, sin temor a equívocos, que estas comunidades periféricas se consolidaron pese al abandono estatal, la represión indiscriminada, la descoordinación institucional –salud, educación, ICBF- y las promesas incumplidas por los políticos y administradores de turno.

Y fue *construyéndose* en el plano de las percepciones de estos habitantes, un efecto discriminante: se sintieron enajenados del derecho elemental al disfrute de la ciudad por parte de los que ellos denominaron *los ricos*.

Y, simultáneamente y en contraposición, barrios como El poblado y Laureles comenzaron a ser centros de atracción para personas adineradas, que estaban dispuestas a pagar propiedades a cualquier precio. Estos barrios se fueron llenando de bloques de viviendas acordonadas o *unidades residenciales cerradas* -que sirven de protección frente a los “otros”- y custodiadas por los servicios de seguridad privados. En los diseños de estas viviendas predomina lo que Armando Silva (1992:75) denominó el “sentido de castillo”, para referirse a la adopción del modelo de las fortificaciones militares. El mundo de sus moradores se redujo a no más de dos ó tres cuadras a la redonda en donde piensan que se pueden mover seguros.

La aparición de estas urbanizaciones y conjuntos residenciales cerrados se constituye un fenómeno urbano que va de la mano de la presencia de aquel otro mundo marginal, de ese proceso de polarización social que vive el conjunto de la ciudad y que, cada vez, es más evidente. Estos conjuntos cerrados se proveen, no solo de vigilancia privada las 24 horas del día, sino que además adoptan una serie de dispositivos de seguridad que bloquean el paso y el libre acceso a quienes no son residentes, en una suerte de privatización de todo aquello que antaño fue espacio público.

Martín Hopenhayn (2002) dice que esta situación ya se ha convertido en un fenómeno común para América Latina y la describe en los siguientes términos:

“En primer lugar el fantasma de la violencia está asociado a los cambios en estilos de vida que se dan en la metrópolis por efecto de la expansión de la violencia. Así por ejemplo, el sentimiento difundido de inseguridad lleva a que las personas restrinjan su circulación en espacios públicos, eviten salir de noche o *visitar ciertos barrios* se recluyan puertas adentro y busquen el esparcimiento en espacios privados. Se reduce así la interacción con otros de diferente origen social y *se desalienta la sociabilidad espontánea* que surge de los encuentros en lugares públicos. Los grupos y clases sociales se aíslan de sus propios pares y se *generaliza un sentimiento de sospecha hacia los demás o los distintos*. ... Todo esto va también acompañado de la *sensación de inseguridad frente a los pobres e indigentes, sobre todo varones jóvenes, percibidos por el resto de la sociedad y por la policía como potenciales delincuentes*.

“La violencia irradia así un cambio en *diseño, vida cotidiana, percepción del otro y valoración de la seguridad*. Por lo mismo, su presencia-ausencia circula por aquellos espacios que han debido reconstruirse asépticamente para conjurar la amenaza del otro. Condominios, malls, puertas reforzadas y segregación de la ciudad concurren en esta *estética epidemiológica* que privilegia la seguridad por sobre el contacto, el desborde y el placer cosmopolita de la errancia en la gran ciudad. ...

“... *el fantasma de la violencia opera generalizando la segregación y estigmatización social. El joven, varón y de bajos ingresos encarna la posibilidad de una agresión o un robo*. Padece el contagio de un fenómeno en el que está pasivamente involucrado por coincidencias socioeconómicas, etarias y de género. .. Si transgrede las fronteras invisibles del territorio de pertenencia, podrá ser requerido por la policía, impedido de ingresar en locales comerciales, o cuando menos electrizado

por miradas que lo desnudan para ver tras su facha un cuerpo al acecho de una víctima -¿pero quién es aquí la víctima?- ... “ (resaltados fuera de texto)

Para los habitantes de estos barrios, los “pobres” que habitan aquellos barrios periféricos, son percibidos como factores desestabilizantes de la vida urbana, en la medida en que se les valora como amenaza, como los *informales* que afean la ciudad y amenaza el trabajo digno, los *ladrones* que atentan contra todo tránsito seguro, los *criminales*, o en pocas palabras la *cuna de los delincuentes*. Surgió así el discurso negativo sobre las “comunidades populares”

El robo, el asesinato, el secuestro, la extorsión y los maltratos han llenado las páginas de la prensa de los últimos treinta años, convalidando el sentimiento de temor que todos los habitantes sienten. La violencia y el temor a ser víctima de ella conducen a una forma de paranoia, se generalizan ideas tales como que “por un par de tenis de marca o importados te pueden matar”, “no debes salir de noche”, “no debes usar esas joyas, pues te arrancan los dedos por robártelas”, “conduce tu vehículo con los vidrios completamente cerrados”, “ojo, con los que manejan motos”, etc, etc.

La consecuencia irremediable es que estos pobladores de los reconocidos como barrios ricos, han vivido y viven de espaldas a aquella realidad brutal, segregadora y excluyente, aunque los atracos, los secuestros, las extorsiones y las muertes que algunas veces los golpean, les hace reflexionar un poco y demandar presencia estatal en aquellos sitios “olvidados”.

Medellín así se presenta como una ciudad de grandes contrastes: con infraestructura escolar pero con niños que no pueden salir de sus viviendas para asistir a las escuelas porque los violentos los aprisionan, con un buen centro histórico que nada dice ni simbólicamente ni históricamente a los habitantes sin

distinción de grupo económico, pero en manos de la informalidad, con excelentes servicios públicos pero cuyos precios son inaccesibles para muchos pobladores. Con entornos que no pertenece a los habitantes que se tienen que encerrar en sus viviendas y clubes, una ciudad en donde la noche no se puede disfrutar sin correr grandes riesgos, una ciudad con buenos servicios de salud pero costosos, etc., etc.

La ocurrencia diaria y cotidiana de los hechos violentos, de los homicidios, de los atracos callejeros, de los secuestros, de las extorsiones, han llevado a la consideración de esta como una ciudad enferma, en donde la violencia es epidemia. De hecho, la Universidad de Antioquia a través de la Escuela Nacional de Salud Pública, tiene un grupo de investigación que desarrolla el tema de “estudios epidemiológicos de la violencia”.

Y es que Medellín vive un muy particular proceso de entrecruzamiento de los problemas de orden público con los de la inseguridad ciudadana. Privatizar los espacios, pagar las vacunas, portar armas, tomar precauciones constantes y contratar seguridad privada –bajo la forma de vigilantes profesionales, milicianos– es lo corriente en esta ciudad, sitiada por el miedo. Esta es una vivencia que no es exclusiva de los sectores de los altos ingresos, sino de todos los habitantes, como se verá a lo largo de este documento. Con énfasis a partir de la década de los años 80 los asuntos del orden público se fusionan al conflicto interno y ello se expresa en la presencia cada vez más clara de actores armados ilegales –como guerrillas y paramilitares, con sus vínculos estratégicos, que reseñamos más adelante, con el crimen organizado urbano– que sobredeterminan los conflictos urbanos y el tratamiento del orden público. Desde el Estado y la administración pública y privada se construye una noción de enemigo interno identificado con la ideología marxista en cabeza de los grupos sindicales, estudiantiles y milicianos, noción que condujo a la declaratoria, solo suspendida por la Constitución del 91,

de *estados de excepción* y al tratamiento represivo y de progresiva “judicialización” de todas las formas de protesta social.

Privilegiar la represión sobre la prevención en el tratamiento de la violencia y de la delincuencia urbana, implica no cuestionarse sobre ¿Cuáles son las condiciones sociales, económicas e incluso políticas que amenazan el ejercicio pleno de la ciudadanía, entendida como construcción y disfrute democrático, vale decir, seguridad, calidad de vida y superación de las inequidades, ambiente y entorno sano, convivencia?

Según información del PEVAL (Programa de Estudios de vivienda) en 1984, en la ciudad existían 50 barrios de invasión regados en 5 de las 6 comunas de entonces. La comuna 5 -El Poblado- si bien carecía de este tipo de asentamiento, también poseía otros de tipo popular, cuya tendencia era derivada de formas de construcción precapitalistas producidas en las fincas de la zona, en donde predominaban los agregados y los apareceros (CEHAP Y PEVAL, 1984: 28)

El censo de 1985, arrojó una población urbana de 1.473.351 habitantes, de los cuales, el 40 % se ubicaba en las zonas periféricas. Y es a partir de 1993, que se comienza a reconocer a estos habitantes de las zonas periféricas como *habitantes de la ciudad*, al aprobar el Concejo Municipal el nuevo perímetro urbano.

A partir de 1995, en nuestra ciudad, el fenómeno del desplazamiento empieza a ser reconocido, con el impacto negativo que él genera sobre la estructura de servicios sociales y colectivos, con la proliferación de la mendicidad y con el incremento de la informalidad. Estos desplazados engrosan el espectro de los pobres absolutos urbanos, colocándose por debajo de las líneas de pobreza, con prácticamente todas sus necesidades básicas insatisfechas. Van expandiendo los límites de la ciudad y reforzando la “otra ciudad”, la periférica.

“Los conflictos y tensiones propios de estas transiciones no fueron percibidos como lo que eran sino que se interpretaron como desorden o como caos lo que llevó al uso de la fuerza y la exclusión para controlar justas demandas sociales y políticas provenientes ante todo de la ciudad informal y también al reforzamiento de criterios y mentalidades premodernas en la dirigencia, lo que les impidió asumir con mayor solvencia y eficacia los retos de la modernización urbana.” (Alcaldía de Medellín, 1994:10)

Lo grave es que a la interminable historia de carencias que viven estos pobladores, se le agrega la fragmentación social generada por el accionar de los grupos de violencia.

“Así se conformaron las bandas y combos que se dividieron la ciudad y marcaron las fronteras invisibles e inviolables, so pena de encontrar la muerte con sólo avanzar unos metros.

“El fuego cruzado combinó balas de la guerrilla, de las milicias, de los grupos de autodefensa y balas oficiales que encontraron víctimas igual en la calle que a la salida del colegio.” (Zuluaga, 2002)

Así se van construyendo, lenta pero inexorablemente, en medio de las inequidades del modelo de desarrollo, de la forma de urbanización y de la exclusión política y cultural, las *fronteras de la ciudad*. Y la forma que fue asumiendo, en el tiempo y en el espacio citadino, la elaboración de los conflictos aquí subyacentes, fue la de la vía violenta¹⁸.

¹⁸Es necesario acotar que lejos de mi exposición existe la idea de que ser pobre significa ser violento. Sin embargo, es necesario indicar que la exclusión económica y social, en nuestras sociedades si debe ser entendida como condición necesaria, aunque no suficiente, para la salida violenta. Compartimos las tesis de Hopenhayn, cuando anota que la violencia en Latinoamérica es consecuencia y respuesta de las diversas formas de exclusión social y política (Hopenhayn, 1990:38)

Pero la explosión urbana que vivió Medellín hasta la década del 70 –a partir de entonces el ritmo de crecimiento poblacional decae- no estuvo acompañado de un proceso expansivo industrial y muy por el contrario, esta industria entró en crisis recesiva de la cual aún no sale: La estructura productiva y empresarial de la ciudad, orientada a la producción de bienes de consumo y caracterizada por la alta intensidad en la utilización de mano de obra, se resintió, reduciéndose las tasas de ocupación y afectando los ingresos laborales familiares. Los fuertes niveles de desempleo cuyo impacto afectó con mayor fuerza a la juventud, hasta el punto que la ciudad,

“... El elevado desempleo juvenil, en particular, ha sido tomado como el más grave problema de la ciudad y una de las principales causas de la descomposición del tejido social.” (Revista Coyuntura Social, 1991:17).

Y como consecuencia de la crisis industrial, se anotaba que el peso mayor de las industrias hacía que el mercado laboral fuera más vulnerable a los cambios de corto plazo de la demanda interna y externa, de tal manera que;

“... ya, en 1984, presentaba la distribución más inequitativa del país urbano. Más que la pobreza, pues, sería esta inequitativa distribución de los ingresos la que estaría a la base del problema actual. ... La economía ilegal encuentra allí terreno abonado y fortalece la marginalización de proporciones importantes de jóvenes de Medellín” (Ibidem:8)

Muy someramente, pues espero poder desarrollar este aspecto a lo largo del texto, puedo indicar que el impacto del conflicto urbano se expresa en el sentimiento, o “fantasma” como lo llamo Hopenhayn, de la inseguridad; el desabastecimiento de víveres y otros productos en muchos barrios de la ciudad, que se presentan con restricciones de circulación impuestas por parte de los grupos armados; la desescolarización masiva de jóvenes y niños, por efecto de los

enfrentamientos armados cotidianos; los problemas de salud pública generados a partir de las dificultades para la recolección municipal de basuras y el acceso a los servicios y centros médicos y de salud; y finalmente, con una connotación muy clara, el desplazamiento intra-urbano con las consecuencias sobre el arraigo y la sociabilidad.

LAS COMUNAS DE MEDELLÍN: CONSTRUCCIÓN DE LAS FRONTERAS INVISIBLES

“Los territorios, siempre diversos, en donde se dibujan geografías del conflicto y del delito”.

(Useche, Oscar:1999)

Es claro que la distribución del territorio ha hecho referencia a un ejercicio estatal, a un producto de la acción administrativa y jurídica que organiza y segrega el espacio. No ha sido comprendido como el espacio de la recordación de los sujetos que lo habitan, y menos, el espacio de la identidad, pues estos son productos de construcciones colectivas de memoria.

La descripción de los territorios en donde se localiza la acción de los actores sociales no es suficiente para comprender la dinámica violenta urbana y sus lógicas organizativas. Pero no por ello podemos soslayar dicha ubicación territorial.

Como ya reseñé, Medellín ha sido el producto histórico de los procesos migratorios de las décadas del 50 y 60's principalmente, en un modelo de urbanización que no vacilé en denominar de “tugurización de la ciudad” en la medida en que los migrantes hicieron crecer la malla urbana de manera irregular y en forma de un tejido trunco y desarticulado, hacia el nororiente y el noroccidente.

Estos nuevos barrios tuguriales tuvieron, y han tenido, una larga historia de enfrentamientos con el Estado a fin de obtener los servicios y la legalización de los predios que llegaron a ocupar. Ello puede explicar los débiles lazos solidarios y de integración social con el conjunto urbano, aunque cada uno de los barrios posee su organicidad y memoria histórica¹⁹. Finalmente, las ayudas a la autoconstrucción y la generación de servicios del Estado, en alguna medida incorporaron los tugurios a la vida urbana de Medellín, aunque no se perdió ese sentimiento de ilegitimidad de y frente al Estado.

Las redes solidarias se construyeron en estos barrios a partir de compartir unas mismas condiciones de exclusión y, paradójicamente, ello les permitió construir sentidos de identidad: El sentido de comunidad barrial ha tenido más prevalencia que el de Ciudad, acentuando la disgregación urbana y la estratificación social.

El funcionamiento de las organizaciones comunitarias surgidas de este contexto, tales como las Juntas de Acción Comunal y las Juntas cívicas entre otras, se organizó alrededor de acciones muy puntuales, dispersas y discontinuas, lo que limitó su presencia comunal. Adicionalmente, es importante destacar que estuvieron ligadas, desde sus comienzos, a los políticos locales ,desarrollando una concepción clientelista y paternalista con relación al Estado. Esto es, aquellas organizaciones se dedicaron a labores de intermediación ante instancias del poder estatal –funcionarios y concejales, como contactos privilegiados- para obtener recursos, y a su vez, los directorios políticos quienes actuaban buscando garantizar sus caudales electorales barriales.

Pero tenemos que precisar que las pobrezas de Medellín, pese a la presencia de los barrios periféricos, con sus evidentes problemas, no se encuentran asociadas a la calidad de la infraestructura –que es indudablemente una de las mejores de

¹⁹ Muchas de estas memorias, que son realmente historias de lucha, han sido recogidas en 2 versiones del concurso “Historia de Mi Barrio” desarrolladas por la Administración Municipal.

Colombia y de América Latina- y tampoco a los servicios urbanos, sino que está en relación directa con los bajos ingresos familiares. Aunque la intervención estatal en estos barrios pobres es selectiva, definitivamente provee el equipamiento urbano básico pues, a través de ello, teje consensos y logra la estabilidad institucional.

De todas maneras, las relaciones de vecindad y la ayuda mutua jugaron un papel fundacional en los barrios populares. Las Juntas de Acción Comunal, canalizaron inicialmente las demandas por equipamiento físico colectivo, pero como relacionamos más adelante, ya hacia fines de los años 70, su accionar por razones diversas les hizo caer en desprestigio. Aparecieron dos sectores, interpelando a la organización comunitaria, en primer lugar, la Iglesia católica pero no en su función evangelizadora y clerical sino en función de lo cívico. Iglesias y curas fueron claves en la consolidación barrial y defensa del espacio. En segundo lugar, desde una ideología de izquierda, diversos grupos políticos trataron de comprometer a los habitantes de los barrios populares en las luchas de los movimientos sociales urbanos y, a la vez, de constituir el respaldo logístico de los grupos subversivos de orden nacional.

Medellín, con una población actual cercana a 2.000.000 habitantes, se dividió, administrativamente, en área urbana y área rural y éstas conformadas por 249 barrios²⁰ divididos en 6 zonas²¹ y 16 comunas²², además de 5 corregimientos con sus respectivas veredas²³.

El área Urbana comprendió las siguientes comunas:

²⁰ Barrio es la menor división territorial y administrativa del área urbana, con población de similar categoría socioeconómica y en donde predomina el uso residencial.

²¹ Zona es una división conformada por comunidades con diferentes categorías socioeconómicas.

²² La Comuna se refiere a 2 ó más barrios económicamente similares, con servicios colectivos y que pueden tener distintos usos del suelo.

²³ Los corregimientos y veredas corresponden al área rural, pero poseen poblaciones inferiores a 20.000 habitantes.

La zona 1 ó Nororiental, compuesta por 4 comunas: (1) Popular, (2) Santa Cruz, (3) Manrique y (4) Aranjuez. Casi en su totalidad conformada por barrios piratas –hoy ya normalizados- y de invasión. Posee un total de 26 barrios, ubicados en los estratos socioeconómicos bajo y medio-bajo, aunque por supuesto, al poseer algunos barrios de invasión, allí se asientan predominantemente la población más pauperizada de la ciudad. En la comuna 4 ó Aranjuez se ubican los pobladores más pudientes (estrato medio bajo), pero curiosamente ella ha sido el epicentro reconocido por las bandas sicariales y de traquetos. La Nororiental es la zona más densamente poblada, albergando a cerca de una cuarta parte de la población urbana total. Su población está vinculada esencialmente a la economía informal y casi cerca de la mitad de pobladores son personas menores de 30 años.

La zona 2 ó Noroccidental, dividida en 3 comunas: (5) Castilla, (6) Doce de Octubre y (7) Robledo. Esta zona fue seleccionada desde los años 60's por los migrantes campesinos, lo que llevó a que allí rápidamente se organizara la intervención estatal desarrollando programas de construcción y financiamiento de vivienda popular, a través del Instituto del Crédito Territorial (ICT). Tiene 73 barrios en los cuales predominan los empleados, obreros, pequeños comerciantes y, en menor medida, los trabajadores informales –estos últimos se ubicaron esencialmente en la comuna 6 ó Doce de Octubre. De tal manera que es dominante el estrato medio-bajo, y en menor medida, el estrato bajo.

La zona 3 ó Centro-oriental, comprende 3 comunas: (8) Villa Hermosa, (9) Buenos Aires y (10) La Candelaria, que albergan 66 barrios. Es una zona de barrios muy tradicionales, aunque, luego de los años 70's surgieron barrios de invasión y piratas. La mitad de sus pobladores se ubican en el estrato medio-bajo y una cuarta parte en el estrato bajo. También ha sido fuente de atracción, por su ubicación hacia las montañas del oriente antioqueño, de flujos de desplazados y de migrantes campesinos, ocurridos desde las décadas de los

años 70's y 80's, lo que indica que también posee pobladores del estrato bajo-bajo. Durante el último quinquenio del siglo XX, esta zona generaba cerca del 30 % de las muertes violentas de la ciudad, es decir 1 de cada 3 muertes violentas²⁴.

La zona 4 ó Centro-occidental, Contiene 3 comunas: (11) Laureles, (12) La América y (13) San Javier. Comprende 55 barrios. Allí predomina el estrato socioeconómico medio (40.2% de los pobladores según informe de Planeación Metropolitana) y en menor escala el estrato medio-alto (27%). Su ubicación más hacia al Occidente y en relación con los megaproyectos regionales como el Túnel de Occidente, hace que sus barrios se hayan constituido en asiento de la mayor masa de desplazados²⁵ y de migrantes campesinos del departamento, generando una situación conflictiva y de demandas sociales y económicas que se desbordaron al despuntar el año 2002, sobre todo en la comuna 13.

La zona 5 ó Suroriental, compuesta por 1 comuna, la (14) de El Poblado, asiento de los sectores más ricos de la ciudad, de los estratos medio-alto y alto, distribuidos en 20 barrios. Además es la zona menos poblada de la ciudad.

Y la zona 6 ó Suroccidental que comprende 2 comunas: (15) Guayabal y (16) Belén. Comprende 9 barrios ubicados predominantemente en los estratos medio-bajo y medio.

²⁴ En el mismo período, la Comuna Nororiental producía, según DECYPOL, 1 de cada 4 muertes violentas de la ciudad y la Comuna Noroccidental, 1 de cada 5 muertes violentas.

²⁵ Se estima que una población de 1.900.000 habitantes sufrieron el desplazamiento forzoso, hacia la ciudad de Medellín, durante el último quinquenio del siglo 20. Ello implica una serie de dificultades por su asimilación por un sistema urbano anacrónico. Medellín tiene 45 asentamientos de desplazados forzados, de los cuales el 40% está en las zonas Centrooccidental y Nororiental.

Y el área rural constituida por los corregimientos de Palmitas, San Cristóbal, Altavista, San Antonio de Prado y Santa Elena. Comprenden un total de 5 veredas.

Rápidamente el crecimiento urbano terminó por envolver y conurbar las zonas semiurbanas, las que quedaron integradas física y socialmente a la ciudad.

Para el habitante corriente de la ciudad, los conceptos de “zona y de comuna” son muy difusos y si se quiere esotéricos, se constituyen en divisiones administrativas que la comunidad no maneja, en tanto que la noción de barrio se convierte en concepto duro en las zonas de pobladores de ingresos medios y bajos –en los barrios de pobladores de altos ingresos, adquiere más vigencia, más corporeidad, la idea de urbanización que la del barrio mismo.

Es fácil comprender la situación explosiva en algunas zonas, pues podría afirmar que las condiciones estructurales de la ciudad, de desempleo y carencias de vivienda y servicios públicos básicos y sociales, afectan a cerca del 70 % de la población, la misma que esta ubicada en los estratos socioeconómicos más bajos. Adicionalmente, el espacio público en ellos se ve restringido pues la disposición de las calles, los senderos y las locaciones públicas se corresponden con las presiones a las del uso residencial, convirtiéndose solo en los espacios residuales barriales. Y es esa misma precariedad de espacios la que conduce a conflictos vecinales –por linderos, depósitos de basuras, muros medianeros, servidumbres, conexiones ilegales, chismes, hurtos, abusos de confianza²⁶.

A este contexto habría que agregarle, sobre todo durante la última década, el detonante del *desplazamiento forzoso*, producido por la presencia de actores

²⁶ Es precisamente el arbitramento de estos conflictos vecinales lo que permitirá sustentar la “legitimidad” de los grupos como las milicias, de lo cual hablaré más adelante.

armado en las áreas rurales. En esta forma el caldo de cultivo, para que germinara la violencia armada en muchos barrios, estaba servido.

PLANO N° 1: SECTORIZACION DE MEDELLÍN A 1992

FUENTE: Naranjo Gloria, 1992.

Y tengo que insistir en *el problema del desplazamiento*, pues ello ha sido en sí mismo una estrategia de guerra de los grupos armados de toda naturaleza: de un lado, se expulsa a quienes han vivido en estas zonas de guerra, bajo la acusación de ser colaboradores del adversario –sea guerrilla, paramilitar o militar- de otro lado, se les “invita” a formar parte de los grupos en contienda, convirtiendo el espacio en corredor militar, o simplemente y en su defecto, se les ordena abandonar el territorio²⁷.

“Informalidad, ilegalidad y pobreza unidos a una precaria gestión urbana, constituyen la urdimbre sobre la cual se van profundizando las rupturas y las fracturas del tejido social, creando situaciones favorables al uso de la fuerza y la violencia para resolver los problemas de la convivencia colectiva.” (Alcaldía de Medellín, 1994:11)

Desde los años 80’s los jóvenes de las comunas Nororiental y noroccidental, organizados en “galladas o pandillas juveniles”, se enfrascaron en cruentas luchas por el control territorial. Se habló de aproximadamente 150 bandas o pandillas y que reclutaron cerca de 3.000 jóvenes. Posteriormente con el advenimiento del narcotráfico, muchos de estos jóvenes de las bandas se transformaron en los

²⁷ En la interpretación de los desplazados encontramos dos perspectivas: algunos los ven como víctimas del conflicto y por ello, sujetos de toda consideración y apoyo, asumiendo una actitud paternalista. Otros, los ven como parte de los actores en conflicto, es decir, que de alguna manera están comprometidos con alguno de los actores en conflicto y su develamiento les obligó a emigrar de sus tierras, por ello se les asume con temor y desconfianza.

sicarios, es decir, asesinos y secuestradores profesionales al servicio de los capos del narcotráfico²⁸.

La violencia fundó la identidad de los grupos de pandilleros juveniles, les permitió expresar sus solidaridades y definir, en un proceso de inclusión, sus rangos, completando un cuadro de realidad y representación.

El narcotráfico se constituyó en la propuesta más atractiva en el mercado social de oportunidades para los jóvenes. Los “traquetos”, nombre con el cual se ha conocido a los narcotraficantes, comenzaron a apoyarse en jóvenes decididos y aventureros de estos barrios populares para la distribución de sus mercancías o los utilizaban como “pistolocos” o sicarios para vengar afrentas, hacer cobros y ajustes de cuentas.

El narcotráfico pues, incidió poderosamente en el debilitamiento de los lazos sociales comunitarios e introdujo la violencia –sobretudo la sicarial- como el mecanismo preferido de resolución de conflictos. Esta fue la ola que arrastró a los jóvenes y los convirtió en nuevos actores sociales: traquetos, sicarios, bandas y escuadrones de la muerte, encuentran en aquellos sus bases sociales.

Conforme al planteamiento Durkheniano de anomia, se procedió fácilmente –y diría que de manera estigmatizadora y discriminante- a asociar la violencia urbana como una *desviación o patología* surgida de la distancia entre las metas sociales y las posibilidades legales de realizarlas, es decir, como el resultado cultural de la pobreza, el desempleo y, como corolario, de las drogas.

Desde todas las formas de urbanización popular, se toma conciencia de su exclusión y de que solamente a partir de la adscripción a algún actor armado, que

²⁸ Estos sicarios desarrollaron culturalmente una forma muy particular de religiosidad, que Salazar (1990) denominó popular: hacían ofrendas en las iglesias y se encomendaban a la Virgen del Carmen o a San Judas o a otro santo, antes de cometer cada uno de sus crímenes.

este dispuesto a preservar el orden y la ley, se puede garantizar su permanencia en el territorio.

Tener acceso muy limitado a las prerrogativas y ventajas que tienen los demás habitantes de la ciudad, hace que ese bloqueo sea percibido como discriminación. Las condiciones propias de vida en estos barrios periféricos, se constituyen en vivos y constantes recuerdos de lo que sus habitantes perciben como la *explotación a manos de los ricos*. Esta es una nueva versión de los movimientos sociales, aunque por supuesto menos pensada de la lucha de clases.

Vemos allí surgir una forma de pensamiento muy particular: ejercer la violencia sobre quienes “poseen todo” legal o ilegalmente adquirido, es absolutamente legítimo, es más es una especie de acto de justicia –tienen que pagar la deuda social contraída con los pobres- así el victimario aparece exorcizado y la víctima castigada en actos de justicia social. ¡¡Ah!! Por supuesto, no importa que el “valor” económico del objetivo del acto violento haya ido permanentemente en descenso. De todas maneras hay que actuar contra los ricos, así no se sepa quiénes realmente son los ricos.

Y contiene otro ingrediente explosivo: la policía y los demás organismos estatales son vistos como *fuerzas de ocupación*, dedicadas más a oprimir, a perseguir que a proteger. A su vez estos organismos represivos se sienten en tierra extraña y perciben las muestras de hostilidad como mera agitación promovida por delincuentes, reforzando de tal manera la discriminación.

De tal forma, asistimos a la formación de estereotipos negativos recíprocos que producen percepciones selectivas: la menor acción de alguna de las partes es percibida por la contraparte como hostil y amenazadora y cada uno considera *su violencia* como acciones de legítima defensa.

Las características generales de estas poblaciones de barrios, que denominaremos populares²⁹, están signadas por la baja calidad de vida y se pueden sintetizar así: funciones productivas degradadas de bajo e inestable nivel de ingresos, altas tasas demográficas, subempleo, informalidad y desempleo abierto, carencia de capacidad de ahorro, bajo nivel educativo y de capacitación, así viven en medio de epidemias, plagas, diarreas y desnutrición. En tanto que sus características físicas son referidas a espacios de la precariedad: viviendas con material de desecho y estructuras poco estables, poca diferenciación de áreas funcionales, carencia de uno o más servicios públicos básicos y provisión ilegal de ellos, hacinamiento, dificultad de servicios sociales, educación, salud, seguridad, saneamiento y de servicios públicos de transporte, aseo, alcantarillado, teléfono, zonas erosionadas o inundables, mala calidad del terreno, calles antitécnicas y en mal estado, etc.

La crisis económica y social de la ciudad Es el contexto ideal favorable para el conflicto. Allí la población joven –ya nacida en la ciudad y la mayoría de las veces con mayor instrucción- se muestra mucho más sensible a las discriminaciones y abandonos reales, mostrándose más proclive a rechazar salidas no violentas, como las “negociaciones” con los funcionarios administrativos municipales, e impulsan la violencia como solución más eficaz. Los jóvenes encuentran en *guerrear* una forma de vida, de reconocimiento y de empleo.

Es decir, es en las altas tasas de desocupación juvenil, la desarticulación familiar, la falta de educación, recreación y salud, en la falta de oportunidades y de inserción en la economía urbana, especialmente para estos pobladores de los barrios populares y de los asentamientos de desplazados del campo, en donde encontramos las bases históricas de un fenómeno que ha marcado la historia de Medellín. La presencia de los grupos milicianos, de paramilitares, de delincuencia

²⁹Desde la década de los 60's se les llamo eufemísticamente “barrios subnormales”, expresión que por supuesto contiene una fuerte carga semántica.

organizada, de combos y bandas juveniles barriales y de la incursión represiva del aparato estatal es solo el corolario o el detonante violento de estas fronteras invisibles.

La presencia miliciana se vio favorecida por el simple desprestigio de los partidos y dirigentes políticos tradicionales que desarrollan una relación muy instrumental con los habitantes y reiterativamente incumplen las promesas empeñadas durante las campañas electorales, incrementando el sentimiento de abandono que se vive en los barrios populares. Ese desprestigio ha arrastrado también a los dirigentes comunitarios, adscritos a Juntas de Acción Comunal y otras instituciones, que les han servido de enlace clientelista a aquellos políticos. Por supuesto, también algunos líderes naturales cayeron en la corrupción.

Es a finales de los años 70 que las Juntas de Acción Comunal llegan a su nivel más bajo de prestigio barrial –corrupción, prácticas clientelistas, malversación de fondos y manejos autocráticos se identificaron con estas instituciones comunitarias- y, simultáneamente se fortalecen los movimientos sociales urbanos que permitieron la emergencia de nuevos liderazgos, casi siempre ligados a jóvenes, con mayor educación y de extracción ya ciudadana. Proliferaron grupos juveniles, grupos culturales y artísticos (danza, música, teatro, pintura), grupos deportivos, escuelas de padres, comités de base, asambleas familiares, grupos de economía solidaria y otras.

La década de los 80's se produce un cambio importante en la ciudad. El narcotráfico irrumpe con todo vigor y arrasa principalmente con las redes solidarias que se habían tejido en aquellos barrios de la periferia, presentando nuevas formas de vida, nuevos valores, nuevos canales de ascenso social, nuevas oportunidades³⁰, nuevos hábitos y prácticas alrededor del consumo y el

³⁰ Tal vez el valor más trascendente que es el respeto a la vida, se pierde con la presencia del narcotráfico y sobre todo con la puesta en marcha del aparato sicarial. Los jóvenes, en medio de una ciudad que no les

negocio de la droga, generando una verdadera “subcultura” (Salazar y Jaramillo, 1992)

“... Posteriormente, la mafia se convirtió en modelo de referencia para la juventud, que encontró allí las formas de realizar sus deseos de status y bienestar. Las bandas juveniles, propias de cualquier gran ciudad, se relacionaron con o fueron influenciadas por los carteles y este hecho les dio una connotación especial” (Revista Coyuntura Social, 1991:141)

Los jóvenes, aunque muchos de ellos tenían ascendencia de migrantes campesino, ya son nacidos en el medio urbano. Ya no tiene el peso de la autoconstrucción de la vivienda y de la autourbanización barrial, pero si cargan el estigma de la pobreza, del desempleo, de la informalidad. Son sujetos sociales que no tienen referentes simbólicos importantes, muy pocas cosas le llegan a su mundo, ni la escuela, ni la Iglesia y menos la familia que se destruye en medio de los problemas y de la violencia interna. Para ellos, el grupo de pares (combo, pandilla) lo mismo que la música, la esquina y la calle son los espacios de socialización. Por ello fueron presa fácil del narcotráfico.

Adicionalmente, la violencia les aporta a los jóvenes *gratificaciones* en el plano de las imágenes de sí mismos, gratificaciones que ya no obtienen por las vías tradicionales de la educación por ejemplo. Se refuerza su sentimiento de poder y prestigio en el barrio y se le ofrece la posibilidad de superar la relativa humillación nacida de la discriminación y la pobreza. También se refuerza la identidad social.

Puede entenderse que se produjo un acelerado desplazamiento de los lugares, espacios e instituciones tradicionales de los procesos de socialización, como la iglesia, la familia y la escuela, hacia otros más informales como los grupos de

ofrece nada, carentes de oportunidades, encuentran que al colocarse al servicio de los capos, les genera prestigio barrial y dinero. La vida de “los otros” se convierte en una mercancía y el dinero y las armas en los medios de adquirirla, no importante que en el negocio se arriesgue la vida propia.

pares –barras, pandillas o combos y agrupaciones juveniles- como los grupos alternativos e ideológicos de izquierda, los grupos religiosos no católicos –sobre todo de tipo cristiano- etc.

La escuela, que antes era la institución en la cual se centran las esperanzas de ascenso y movilidad social, en la situación de crisis económica aguda por la que pasa la ciudad, definitivamente pierde el atractivo para los jóvenes, y claro, el mundo del trabajo, en lugar de ofrecer a este segmento poblacional opciones ocupacionales, le presenta un conjunto de barreras. Incluso, la administración municipal construyó escuelas y promovió la educación gratuita en los barrios populares de la ciudad, pero rápidamente los pobladores se desescolarizaron y desertaron. La crisis recesiva de la industria antioqueña redujo las oportunidades de empleo para los padres de familia, incrementando así la presión sobre los jóvenes quienes deben contribuir en el mantenimiento del grupo familiar, lo que los lleva a desertar de las escuelas y colegios para ingresar a la economía del rebusque.

Tampoco la familia pudo proporcionar a los jóvenes un espacio primario de socialización. Los cambios de pareja, la inestabilidad del grupo familiar, las separaciones y las pérdidas de alguno de los padres, la adquisición de nuevos roles, el madresolterismo y el abandono de los hijos, conformaron un muy débil referente de socialización para los jóvenes y futuros jefes de hogar.

Por el contrario, la pandilla de pares proporciona al joven la valoración, la lealtad, protección y apoyo necesarios. Es su respuesta a la exclusión que padece y la forma de inclusión.

Y... la guerra se convirtió en la principal fuente de empleo disponible para estos jóvenes.

De esta manera, los jóvenes habitantes de estos barrios populares se han convertido en los protagonistas del nuevo escenario violento barrial. Ellos son las víctimas y los victimarios por excelencia. Estos muchachos desarrollan nuevas prácticas culturales ligadas a la imagen del macho, del valiente, del “duro” y así se gastan el dinero que les provee su servicio al narcotráfico y otros delincuentes, en la vestimenta de moda, en las motocicletas de mayor cilindraje, en las “nenas”, en la bebida y el vicio de cocaína, marihuana y bazuco

El panorama es simple: a un lado de la vida barrial están las limitaciones de la pobreza, la exclusión y la discriminación y ellas se enfrentan con la resistencia y la violencia “defensiva”, así se provee cierta identidad; al otro lado de la misma vida barrial, está la criminalidad organizada y al alcance de la mano. Pedir y delinquir, se vuelven los verbos que mejor definen la “acción” de estos sujetos

Ya los barrios populares de las décadas del 60 y 70’s van quedando atrás en su configuración y vivencia, los lazos comunitarios y solidarios comienzan a erosionarse –decrecen con la consolidación barrial- y ahora en los años 80’s y 90’s, la identidad compartida por las condiciones de pobreza cede a otros factores identitarios, nacidos alrededor de la violencia y de los grupos organizados armados: pandillaje y bandas se retroalimentan y definen nuevos tejidos sociales, en medio de las disputas territoriales de milicianos, paramilitares y organismos del Estado.

Cada grupo armado coloca su impronta sobre el territorio. Las marcas, por medio de graffitis, en cuando muro y pared se encuentra en el barrio define quien tiene el poder de la zona y a quien hay que recurrir para el simple tránsito de personas y mercancías.

La violencia cotidiana es la respuesta a estas condiciones estructurales de miseria. Es la estrategia de supervivencia ante la no inserción en el mercado laboral y ante las carencias de servicios públicos y sociales básicos³¹.

De hecho, “la guerra urbana se desarrolla en un territorio repleto de callecitas, pasadizos, callejones, cañadas, escalinatas y ranchos que forman un laberinto,” producto del libre asentamiento y sin control de pobladores venidos del campo, muchos desplazados por la misma la guerra rural.

Con un panorama así que se va tornando en dominante era lógico que progresivamente nuestra ciudad perdiera esos vestigios de sentido de pertenencia –tan ligados, en nuestro medio, al mundo rural- y el entorno dejara de ser reconocido como propio, que el individuo fuera perdiendo el concepto de barrio y plaza, los mismos que se tornaron en simples usos sin valor, ni significación. Por supuesto, los sitios de encuentro y vida ciudadana –con excepción de la calle que adquiere vitalidad barrial- desaparecieron y fueron reemplazados por los Centros Comerciales con su espíritu consumista y mercantil, espacios pues cargados de otra significación menos simbólica.

Inherente a lo anterior, el concepto de comuna, como dije antes, nada connota como comunidad y, por el contrario, comienza a ser utilizado de manera estigmatizada para referirse a los pobladores “pobres y violentos” de la ciudad.

En estos términos, las comunas se convierten en

“territorios siempre diversos en donde se dibujan geografías del conflicto y del delito... (en donde se) avanza en el trazado de fronteras por grupos de habitantes que ven en ello la única manera de establecer referentes de

³¹ Pero aclaremos que no toda violencia de este tipo, implique que su actor tiene que ser marginal o desempleado, etc. Es una “forma de procesar su exclusión” dice Hopenhayn.

identidad –estrategias de inclusión, diría Hopenhayn, aclaración fuera de texto- o de construcción de micropoderes: en fin, se generaliza la territorialización de la ciudad como oposición a la constitución de lugares para la enunciación de la vida, para la irrupción de acontecimientos de ciudadanía plena” (Useche: 6-9)

CONTEXTO ACTUAL: LA ENCRUCIJADA DE LOS VIOLENTOS³²

Una preocupación recorre buena parte de la ciudad: la **inseguridad**. Nuestra ciudad despunta en el siglo XXI, según las estadísticas del Departamento de Investigaciones Criminológicas y Apoyo Judicial (DECYPOL), con una tasa de 150 homicidios por cada 100.000 habitantes, lo que la coloca en el no muy honroso lugar, de ser quizás la ciudad más peligrosa del mundo³³. En el período de 1998 a 2002 se tuvo un promedio anual de 3.200 muertes violentas y el decenio, entre 1992-2002 registró 42.393 muertes violentas en la ciudad. Todo ello es el resultado del accionar de aproximadamente unas 650 bandas que existen en la ciudad.

Como anoté anteriormente, las primeras dinámicas importantes del conflicto en Medellín estuvieron asociadas a las luchas por la tierra y el derecho a la vivienda y al equipamiento urbano –décadas del 50 al 70- así vimos florecer las movilizaciones y protestas callejeras, las pedreas, los desalojos y la represión. Todas fueron luchas definidas por el proceso de producción y organización social del espacio .

³² En este aparte quiero resaltar solo algunos aspectos propios de un mapeo del conflicto urbano. Particularmente me referiré a la dinámica y estructura de las relaciones de antagonismo, a su estado actual y a los escenarios y tendencias observables.

³³El Comité Permanente Para la Defensa de los Derechos Humanos de Colombia- trae datos estadísticos que también son recogidos por Daniel Pecaute (1997) que nos permiten dimensionar esta situación: Brasil viene con una tasa de homicidios de 24.6 por cada 100.000 habitantes, Panamá de 22.9, México 20.6, Venezuela 16.4, Perú de 11.5 y Estados Unidos de 8. En contraste Noruega sólo llega a 0.9 homicidios.

Pese al riesgo que puede entrañar una concepción de la violencia urbana centrada en los actores y no en los factores que la propician³⁴, que la generan, desde mi perspectiva, considero que es relativamente fácil establecer, los perfiles asociados a las formas de violencia urbana más destacados por décadas en los últimos treinta o cuarenta años: La década de los 70's definía el tipo de violencia sobre la base de lo simplemente delincencial ligado a condiciones de pobreza y marginalidad, por ello los hechos violentos recurrentes son asociados a delitos económicos en primer lugar tales como los atracos callejeros, los "raonazos" a los transeúntes y pasajeros de taxis y buses, los asaltos a entidades bancarias, joyerías y demás negocios y, en segundo lugar aparecen asociados a las riñas callejeras y las peleas vecinales e intrafamiliares. Ya los años 80's se expresó con el surgimiento de una delincuencia organizada (bandas) y asociada principalmente al narcotráfico y a la justicia ejercida por mano propia; la década de los 90's presentó la irrupción de los grupos milicianos ligados a una ideología de izquierda; simultáneamente esta década se caracterizó también por la irrupción de los grupos de autodefensa paramilitar, organizados y ligados a una ideología de extrema derecha.

Por supuesto la génesis de cada uno de estos grupos y los intereses que los ligan son sumamente diversos, aunque como veremos al despuntar el siglo XXI se presenta un entremezclamiento y una pérdida de sus relativas identidades ideológicas.

A partir de la década de los 80's encontramos una relación inversa entre los homicidios y el número de delitos denunciados: en 1981 por cada homicidio que ocurría en la ciudad se denunciaban 14.5 delitos, pero este número desciende en 1985 a 11. ¿Qué pone en evidencia este hecho? La puesta en marcha de los aparatos de justicia privada, la aplicación de justicia por mano propia y la crisis de

³⁴ Se ha constituido como parte del ABC de la Resolución de Conflictos la idea de que los "individuos no son el problema, sino que lo encarnan". Enfatizaría que se requiere buscar los nexos sujetos sociales y problemas.

la justicia colombiana, la deslegitimación del aparato judicial y, en últimas, que las relaciones entre los individuos y la cosa pública definitivamente entró en crisis.

Son inocultables las debilidades e ineficiencias del aparato judicial colombiano y día tras día asistimos a innumerables manifestaciones de impunidad e injusticia. Ello condujo al ejercicio de la justicia privada, bien por la acción de quien se considera víctima, o bien por la utilización de un tercero –sicariato- La esencia es que se “ofrece justicia pronta generalmente más económica que recurrir a los juzgados”.

De esta manera el sicariato se ha constituido en una forma de vida, ejercida esencialmente –aunque no de manera exclusiva- por jóvenes de los barrios pobres. Estos sicarios paulatinamente asumen la forma de verdaderas bandas u organizaciones delictivas, cada vez más profesionales y mejor armadas, lo que garantiza su eficiencia.

Aunque el sicariato como organización se puso en marcha al servicio del crimen organizado del narcotráfico, también es cierto que responden a solicitudes privadas o individuales. Es de desatacar que el sicario mismo, al iniciar una cadena de ejecuciones termina, él mismo, en ser víctima de otro que a su vez fue contratado para “borrar” ciertas huellas sobre quién realizó el contrato inicial.

Hay elementos de las expresiones de violencia urbana que Medellín comparte con otras ciudades de América Latina. Una buena parte de los crímenes son cometidos por jóvenes y, en todas partes, aparece la droga como un factor relevante. Se señalan como características comunes más sobresalientes, las siguientes: la pobreza y las desigualdades sociales, las que “generan agudas tensiones sociales”. La evidencia recogida, muestra que algunos componentes de este deterioro tienen una repercusión directa en la criminalidad, por ello, las altas tasas de desocupación juvenil se convierten en tema de preocupación urgente, lo

mismo que el deterioro familiar ya que tiene consecuencias negativas, afectando su papel en la prevención del delito.

Si estos factores se unen con la pobreza, encontramos que la desarticulación familiar se convierte en elemento de violencia altamente relevante, pues la violencia intrafamiliar adquiere características alarmantes.

De igual forma, hay una correlación directa entre nivel educativo y criminalidad, y la explicación es sencilla: a mayor nivel educativo, menor criminalidad. Medellín, sin duda, encaja perfectamente en este perfil general.

En Medellín existen barrios enteros, por no decir comunas, que se encuentran sitiados por los diferentes actores armados. En donde la confrontación armada es abierta y va de la mano de la intensificación y, a la vez, degradación del conflicto.

Hoy se habla de la existencia de cerca de 650 bandas en Medellín y su presencia distorsiona tanto el funcionamiento ciudadano, que existen barrios y sectores urbanos en donde el riesgo y la inseguridad son tan altos que las fuerzas policiales vacilan en intervenir, lo cual acentúa más la imagen discriminatoria de *sectores barriales por fuera de la ley*.

De esta forma el conflicto urbano, tiene como particularidad que hace más visibles a todos los actores sociales, los nuevos y los viejos, los que defienden intereses que históricamente han conculcado a las mayorías y los que pugnan por el acceso al libre disfrute de su ciudadanía, los que pugnan por el cambio de estructuras, los que viven de explotar las expectativas y desesperanzas de los pobres y los convierten en simples instrumentos, etc. Todo ello en la medida en que son más abiertos los enfrentamientos.

Digamos de paso, que la existencia de grupos organizados que actúan ilegalmente, sin que puedan ser sometidos por el Estado, ha creado en el imaginario colectivo, la impresión de que éste ha perdido el monopolio del uso de la fuerza y que en consecuencia se considera lícito organizar grupos armados autónomos -¿autodefensas? ¿servicios de seguridad?- que en su accionar desarrollan sus propias concepciones sobre la vida y la justicia. De tal manera que los espacios que debería ocupar el Estado, en situaciones de crisis como la que ha vivido la ciudad desde los años 80, son copados por aparatos de violencia.

Para rematar, el *comportamiento equivocado* de la policía y los organismos de seguridad del Estado (SIJIN, ejército, fiscalía...) persiguiendo y judicializando la protesta ciudadana, refuerza la reducción del umbral que separa a los jóvenes principalmente del recurso de la violencia.

Una visión integral del conflicto urbano nos permite identificar orígenes y causas diferentes que generan tipologías conductuales distintas de los actores que se adscriben bien a la delincuencia organizada, bien a las milicias subversivas, bien a los combos barriales, o bien a las autodefensas.

Una primera manifestación de la violencia urbana tiene que ver pues con la convivencia ciudadana, con la cotidianidad, con la vida diaria, con la construcción de ciudadanía. Ciudades del desarraigo, cunas de la pobreza y expresiones de la exclusión, de la desterritorialización solo podían producir violencia.

Las lógicas que mueven la violencia cotidiana, las de los delitos menores, son sumamente diversas –de hecho, taxonómicamente se le ha reconocido como la *violencia difusa*- pues puede partir desde aquello que mueve a la violencia doméstica y familiar, pasando por lo que está implícito en la de género y lo vecinal,

y llegando hasta lo que mueve el crimen corriente urbano (robos y atracos, homicidios, etc.) y que hemos de reconocer como delincuencial³⁵.

Esta violencia cotidiana esta referida a la carencia de reglas sociales y tiene como primera expresión la criminalidad común: son los que atentan contra la propiedad, la que emana de las pandillas juveniles. Otra expresión se encuentra en las llamadas “limpiezas sociales”: acabar con la vida de quienes encarnan las patologías sociales: los drogadictos, prostitutas, homosexuales, gamines, mendigos, etc. Y una última expresión se ubica en el terreno de lo microsocial, en donde destacan con luz propia la violencia intrafamiliar y los conflictos vecinales.

Ante el desprestigio de los organismos estatales y la natural desconfianza que ellos acarrearán, los habitantes de estos barrios pobres asumen la responsabilidad de la seguridad en sus barrios, de manera que organizaron Comités de Vigilancia –son pues privados y de orden defensivo- En un principio, cuando los miembros del Comité capturaban algún delincuente, no lo entregaban a la policía sino que lo *cascaban*, es decir, lo golpeaban y lo echaban del barrio. Era una labor de limpieza de malhechores.

En estas circunstancias, la violencia emergió como factor estructurante de las formas de socialización de las bandas juveniles, actuando en la misma forma que antes lo hicieron los enfrentamientos deportivos y las celebraciones cívicas. La violencia se constituyó en la forma por excelencia del vínculo social.

Se configura así el cuadro que ya Álvaro Camacho y Álvaro Guzmán (1997) cualificaron como las causas fundamentales de la violencia urbana: la presencia de desigualdades económicas, un muy débil desarrollo de la cultura ciudadana, la

³⁵ Esta violencia delincuencial es circunstancial y de oportunidad y se presenta movido por condiciones –la mayoría de las veces- de exclusión económica.

precariedad del sistema de justicia y la aparición de los delincuentes comunes como nuevos actores.

Estas lógicas, son sumamente diferentes a las que se mueven en el crimen organizado, el mismo que se nos presenta dinamizado, y a la vez articulado, por la presencia del narcotráfico y que, en últimas, constituye la mejor expresión del desordenamiento social y el surgimiento de una justicia y de un poder *sui generis*.

En segundo lugar, tenemos que mencionar el problema del narcotráfico, pues sus efectos en el relacionamiento social son innegables. Entre ellos, la violencia que se alimentó de las condiciones sociales de sectores desfavorecidos y que están asociados a la figura de Pablo Escobar y otros “patrones”³⁶, tiene una repercusión tremenda en la vida de la ciudad.

Haciendo una relación del impacto del narcotráfico en la presencia de la violencia homicida, se planteó la siguiente hipótesis:

“... alude al narcotráfico, como principal factor asociado con ese aumento (de la violencia homicida, aclaración fuera de texto) en un triple sentido: primero, dado que el negocio de la droga es ilegal y ofrece enormes ganancias, bien puede pensarse que los conflictos generados en su interior (por incumplimientos, engaños, delaciones, extralimitaciones, etc.), sea entre grandes capos, sea entre negociantes medianos y pequeños, tenderán a solucionarse mediante el uso de la fuerza. Segundo: el narcotraficante tiende a emplear la fuerza contra las autoridades o personas que obstaculizan tozudamente su negocio. Tercero: al fomentar el consumo de droga ... el narcotraficante estaría también contribuyendo a la violencia

³⁶“Alrededor del tema de la producción, distribución, circulación y protección de los narcos, llegaron propuestas de organización de grupos armados delincuenciales a los barrios populares con distintas funciones: cuidar el negocio, ajustar cuentas, cobrar venganzas. Se fortaleció entonces un aparato militar liderado por Pablo Escobar, Alfredo Vásquez “El Pana”, John Jairo Velásquez “Popeye”, Carlos Aguilar “Mugre”, Otoniel González “Otto” y los hermanos Mosquera (“La Quica y Tyson”)” (Elizabeth Yarce, 2002)

que ejercen los drogadictos ya para satisfacer sus necesidades, ya en momento de enajenación. Se seguiría, entonces, que si un conjunto grande de narcotraficantes escoge una ciudad de residencia de toda la vida, cabría esperar en ella un aumento sustancial en las tasas de violencia homicida” (Revista Coyuntura Social, 1991:50-51)

Después de doce años de violencia ininterrumpida, los rasgos culturales propios que surgen de este problema, tienen raíces y dimensiones muy profundas: La transmisión generacional de la cultura de la violencia es un signo de inmensa preocupación³⁷. El llamado Cartel de Medellín, desde 1985 puso en marcha las grandes redes sicariales y colocó bajo su égida y servicio a grupos de pobladores desposeídos, convertido en miembros de bandas barriales, y a otros jóvenes, muchos de ellos venidos de la misma insurgencia

Las pandillas juveniles se constituyen sobre la base de territorios que los jóvenes se esfuerzan por controlar. En estos territorios, los habitantes consideran a estas pandillas sus defensoras o sus víctimarios.

El narcotráfico llevó el conflicto urbano, por los medios que ha utilizado, a niveles mayores de degradación y de deshumanización. Esta es una deuda histórica que tendrá que pagar³⁸. Por ello, coincido con quienes afirman que se produce un

³⁷Según algunos autores –Jesús Martín barbero, María Teresa Uribe, Alonso Salazar, etc. – han surgido rasgos culturales o una “cultura de la violencia” –cultura de la violencia familiar y sexual, la de la violencia escolar, la violencia laboral, etc.- que se ha transmitido a lo largo de estos últimos 15 años de manera generacional. Sin pretender intervenir en la existencia o no de dicha cultura, quiero precisar qué se entiende, en este documento, como cultura de la violencia: el desconocimiento del orden jurídico, mediado por el Estado, que es reemplazado por la utilización de la fuerza con el fin de lograr objetivos particulares. Se trata, en esencia, de la quiebra de la autoridad del Estado y de las Instituciones para integrar a los asociados en un sistema de normas y valores.

³⁸ En otro de sus textos, el reconocido como violentólogo, Álvaro Camacho (1995) resalta que el narcotráfico ha generado violencia en tres direcciones: hacia su interior (intra e-intermafias, como por ejemplo, en los ajustes de cuentas por efectos del reparto de los réditos del negocio), violencia orientada hacia las barreras que obstaculizan directamente el funcionamiento del negocio (convirtiendo en objetivo a los funcionarios del Estado, a políticos y a opositores), y violencia ejercida hacia quienes pretenden modificar el orden social sobre el cual se realiza la actividad (como son las acciones contra los sectores de la izquierda y los líderes populares y sindicales).

cambio cualitativo importante entre los agentes de la violencia, hasta el punto de poder hablar hoy “ya no de bandas, sino de verdaderas organizaciones criminales” para destacar su profesionalismo y los grandes arsenales de que fueron dotados por el mismo narcotráfico. Así surgieron bandas como Los Cariñositos, los Gachas, los Mecatos, los Priscos y quizás las más reconocidas: la Ramada y la Terraza.

No obstante estar el narcotráfico en todos los barrios de la ciudad, sin distinción de condición socioeconómica, si es claro que su forma de penetración varió de acuerdo al nivel cultural y los ingresos. De hecho, el narcotráfico encontró en esa población pobre y aislada de la legalidad y de las pautas culturales que sostienen el Estado, una situación favorable para su utilización, bien como correos humanos (mulas) o como integrantes de sus escuadrones de seguridad y de delincuencia (crimen organizado)

El poder que llegaron a tener estas bandas en los barrios populares fue prácticamente absoluto: ellas definían quién vivía y quién moría, quién pagaba el “impuesto o vacuna” establecido por ellas, qué mujer era de su propiedad e incluso definían quién tenía que abandonar el barrio. Así se produjo otro elemento de distorsión urbana: se aceleró la movilidad intraurbana por condiciones de seguridad y factores de violencia.

Siguiendo, por analogía con Romero (1976), podríamos concluir que el narcotráfico produjo *una masa que no posee un sistema coherente de actitudes ni un armonioso conjunto de normas*, pues la casuística se imponía y cada “patrón” imponía sus propias leyes y normas, generaba sus propios estilos de vida.

Para enfrentar a las bandas, cuyo poder crecía sin coto y al amparo de una policía ineficiente y corrupta –que cobraba *impuestos* a las casas de expendio de vicio, y

que traficaba con armas- la comunidad también decidió crear sus propias formas de autodefensa: padres de familia, comerciantes y jóvenes “a lo bien” se unieron para proteger a la comunidad, actuando anónimamente y encapuchados –por eso se les denominó “los capuchos”- Aunque tuvieron una capacidad militar muy limitada, ajusticiaron ladrones, asesinos, violadores, drogadictos y a quien ellos consideraron indeseable. No tenían pretensiones económicas ni políticas, su única meta era sobrevivir.

La existencia de mini-ejércitos de guardas o vigilantes privados de un lado, y de especies de justicieros que vengan las afrentas de otro, parece que encontraran su *justificación* en la indignación moral surgida de la presencia de los pillos, de las pandillas juveniles y de las nuevas bandolas barriales.

La situación de inseguridad se extendió rápidamente por el conjunto de la ciudad, hasta el punto que en los barrios residenciales de clases medias y altas, lo mismo que en los establecimientos comerciales, se tuvieron que conformar organizaciones de autodefensa y, a la vez, se indujo a la conformación de verdaderos ejércitos de vigilancia privada³⁹.

Es importante indicar que estas formas de autodefensa, con sus métodos violentos de autoprotección, al cabo de unos pocos años derivó en grupos de paramilitares, contando en muchos casos con la tolerancia de las fuerzas policiales y militares.

De otro lado, en tercer lugar y agravado por la delincuencia que surgió con el narcotráfico, aparecen las marcas del conflicto nacional, de naturaleza política e ideológica, con su expresión directa en la ciudad. Se presenta la violencia como elemento estructural de la evolución política y social del país. Como producto de la

³⁹ El gobierno local, al amparo de los principios constitucionales de defensa y protección de los ciudadanos, legalizó esta situación produciendo los decretos 029 y 358, por medio de los cuales se “reglamenta el funcionamiento de los grupos de autoprotección en la ciudad”.

exclusión política, de la falta de participación, de la falta de coherencia de la Administración Estatal y de su ausencia absoluta en algunos sectores de la ciudad se tiene la pérdida de legitimidad del Estado y, por ende, la disputa sobre su autoridad y poder. Así tenemos como expresión urbana en Medellín –al igual que en otras ciudades del país- una lucha territorial entre las milicias de los FARC y el ELN, y las autodefensas. El M19 mostró el camino, desde 1984, cuando pactó un acuerdo de paz con el Gobierno Nacional y desarrolló una estrategia de presencia urbana creando los que llamó “*campamentos de paz urbanos*”⁴⁰. El ejemplo fue seguido por los otros grupos de insurgentes, quienes antes consideraban la militancia de la ciudad como simple apoyo logístico y de divulgación política.

La estructura de *tipo Milicia*, busca aprovechar la mayor cohesión social barrial o vecinal, que determina relaciones primarias, “cara a cara”, bajo el supuesto que ellas nacen del hecho de compartir un territorio, una identidad de normas y valores y una historia de lucha. Por supuesto, el espacio que mejor se acomoda a esta concepción es el que ofrece cualquier barrio de invasión en las ciudades y en forma subsidiaria, los barrios piratas y de pobladores pobres.

Pienso que es válido afirmar que el fenómeno miliciano es hijo natural de la combinación de dos factores: la inequidad y la impunidad.

La estrategia que se había desarrollado hasta entonces, por parte de la insurgencia, era reconocer la ciudad como un centro de aglutinamiento de simpatizantes, de acopio, propaganda y retaguardia. En ese proceso se “aliaban”

⁴⁰ En el Congreso de la Paz y la Democracia del M19, que se celebró en la localidad de Los Robles, Departamento del Cauca, en 1984 se decidió que el M19 sería “gobierno” y para ese objetivo nace el proyecto de crear las Milicias Bolivarianas que tendrían como asiento las ciudades, ellas serían núcleos de base del movimiento guerrillero, actuando bajo la dirección directa del M19 –a la manera de los *sujetos insumisos*– que, sin perder el norte de la toma del poder, funcionarían como representantes de la guerrilla y buscarían compenetrarse con la comunidad, articularse a ella a través de la solución de problemas cotidianos. Serían grupos multifuncionales con actividades propagandísticas, políticas y militares, además de las sociales y comunitarias. En Medellín, se ubicaron en los barrios Popular, Zamora y Moravia de la Nororiental, en Villatina de la Centrooriental y en Castilla de la Noroccidental.

con los líderes naturales de la comunidad y se ligaban a las luchas estudiantiles y comunitarias en defensa de reivindicaciones de todo tipo.

Pero a partir de 1985, con la presencia del narcotráfico, el peso que adquieren las bandas –también se les llamó “bandolas”- y la guerra sucia que se estableció desde los organismos de seguridad del Estado, con una política sistemática de debilitar el aparato guerrillero, asesinando los líderes comunitarios y los simpatizantes, se dio un viraje en la estrategia miliciana hacia la autodefensa

“Nosotros éramos quienes regulábamos el comercio en los barrios pobres. Regulábamos el transporte. Mediábamos en las disputas: aquéllas que surgían entre vecinos, aquéllas que tenían que ver con los inquilinos y los propietarios. Realizábamos una función que realmente competía al estado. Pero el estado nunca tuvo presencia alguna en estas zonas. Llegamos a ser la única fuerza con alguna legitimidad (James Urrego⁴¹, entrevista con la autora en 1995) (McDonald, 1998)

En este contexto se produjo la disidencia de muchos milicianos, que comenzaron a comportarse como **sujetos desgajados**: algunos, que perdieron las perspectivas, fueron cooptados por aquellas bandas al servicio del narcotráfico, asumiendo un comportamiento contrario a la lógica de la organización de la cual provenían y defendiendo un sistema social que supuestamente habían querido destruir. En este proceso su foco de atención para los ataques fueron sus antiguos compañeros, en una suerte de cacería de brujas. Llegan efectivamente a esta posición, al considerar que existió un comportamiento pusilánime por parte de sus líderes guerrilleros, al paquidermismo en la toma de decisiones, o bien que no hicieron absolutamente nada ante el crecimiento de las bandas. En este orden de

⁴¹ James Urrego fue uno de los dirigentes fundadores de la Cooperativa de Seguridad COOSERCOM y miembro de las Milicias Populares del Pueblo y para el Pueblo (MPP), fue asesinado al poco tiempo de conformada la Cooperativa. La idea de la COOSERCOM era que las milicias se quedarían con sus armas y velarían por la seguridad de sus barrios, convirtiéndose en una entidad legal.

ideas se vendieron al mejor postor, que les ofrecía el respeto por su vida, dinero y poder en sus barrios.

Otro grupo de milicianos también desgajados y desencantados, consideró que la operatividad de la guerrilla en la ciudad era muy lenta, bien para defender a la comunidad misma, a sus líderes naturales, o bien, al compañero miliciano amenazado en su vida y que, paralelamente, el poder de las bandolas seguía en crecimiento, optó por sacar provecho de su proyecto político militar y continuar como milicias pero independientes de los grupos insurgentes, buscando defender a la comunidad, realizando acciones diseminadas por el territorio “cazando” a los enemigos del pueblo, sean bandas, drogadictos, desechables, ladrones, etc. en un comportamiento, más marcado por la emoción y el ejercicio del poder.

“ ... muchos de los jóvenes que hacen parte de las milicias buscan protagonismo y reconocimiento social a través de la única forma que han conocido, la violencia, y adhieren a ellas no necesariamente porque compartan el ideario político de sus jefes sino por un real afán de servicio a las comunidades y como una expresión de búsqueda de identidad.” (Alcaldía de Medellín, 1994:27)

El primer grupo de milicias constituido en la ciudad fue el de las Milicias Populares del Pueblo y Para el Pueblo, que actuaron esencialmente en la zona Noroccidental y en los barrios Popular, La Isla y Santo domingo de la zona Nororiental, surgieron en 1986, como una disidencia guerrillera, reclamando su independencia de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar (FARC, M19, ELN) aunque reclamándose como guerrilla urbana revolucionaria, y como respuesta a la guerra sucia desatada por el Estado y a las masacres. Desarrolló su trabajo táctico y estratégico más como proceso militar y de limpieza que de labores organizativas, lo cual históricamente produjo su mayor desgaste y que posteriormente hubieran tenido que pactar con la Administración Municipal. Criticaron toda participación política

institucional –lo cual es paradójico con sus pactos de 1994- rechazaron la participación electoral y no apoyaron los procesos organizativos.

Como actores sociales desgajados (Salazar, 2003) sus acciones directas no son profundamente pensadas, aunque si tienen vocación de cambio, “nos mantenemos firmes en nuestra ideología revolucionaria, en la toma del poder” decían. Sus acciones oscilan entre el enfrentamiento personal y la acción colectiva.

De todas maneras, ha sido preocupación de quienes estudian el fenómeno miliciano, el hecho de que entre estas milicias se perpetúe la idea de que el delincuente, común u organizado en bandas, es un *desechable*, es decir, un sujeto del que se puede prescindir. Las preguntas que surgen son ¿En donde quedan o qué lugar ocupan los derechos humanos en esta lógica miliciano? ¿La lógica represiva es su fundamento social y su fundamento de seguridad y no la política de prevención? ¿Cuál es su proyección como Estado alterno?

Por lo anotado en el párrafo anterior, se puede colegir que la intervención miliciano termina en fortalecer percepciones morales de carácter autoritario en la gestión de los conflictos sociales urbanos, en detrimento de las concepciones políticas que se supone estarían en su base de militancia izquierdista. Las limpiezas barriales para enfrentar la criminalidad urbana, corroboran pues esta apreciación.

Independientemente de las respuestas a los interrogantes anteriores es obvio que se tiene que resaltar el hecho sociológico de que estas milicias se constituyen en una nueva forma de autodefensas, que se legitima y justifica por la limpieza de delincuentes en los barrios populares, ante la indiferencia estatal y que, como hecho novedosos, se reclama desde la izquierda.

Luego, hacia 1990, surgieron las Milicias Populares de Valle de Aburrá, con fuerte influencia del ELN y actuando en los barrios Villa del Socorro, Santa Cruz y en la zona del basurero que dio origen al barrio Moravia, que se preocupó por el trabajo comunitario, impulsando en los barrios donde se asentaron, la conformación de las Acciones Comunales, las Asociaciones de Padres de Familia, Comités Cívico Populares, agrupaciones Juveniles (dedicadas al arte, el deporte, la música, organización de torneos) y la formación de Microempresas como economía alternativa.. Este grupo de milicia enfatizó más el proceso organizativo que el de ajusticiamiento de delincuentes y drogadictos, sobre la idea que el problema de las bandas era un problema pasajero. Su propósito se esbozó incluso en la elaboración de un plan quinquenal para un movimiento político en toda la zona metropolitana (El Colombiano, 1991:4b)

De estas milicias se desprendieron luego tres grupos: Las Milicias Independientes del Valle de Aburrá, las Milicias de la Plaza Minorista y las Milicias 6 y 7 de Noviembre, estas últimas actuando en el barrio 8 de Marzo de la comuna 9 y en la vía que conduce al Oriente antioqueño.

El proceso de reclutamiento de los milicianos era muy laxo, se trataba de cualquier persona con la única condición de que quisiera defender al barrio, sin importar su procedencia –podía provenir de las bandas o ser un drogadicto o delincuente regenerado- contrario a lo que ocurrió con aquellos milicianos del M19, aquí el énfasis se puso en la formación militar, relegando lo político. Quizás esta ha sido una de las principales causas de su desarticulación y su fácil “cambio de bando”.

Al despuntar la década de los 90’s, empezaron a ubicarse en los diferentes barrios de las comunas nororiental y occidental, las Milicias Populares Revolucionarias del ELN⁴² que se ligaron a las Milicias Populares del Valle de Aburrá- y las Milicias

⁴² Integradas por las Milicias 6 y 7 de Noviembre que actuaron inicialmente en Barrios Villa Turbay, Villa Lillian, Llanaditas y 13 de Noviembre en la zona Centrooriental; las Milicias América Libre con presencia en

Bolivarianas de las FARC, estas últimas actuando en el barrio de invasión La Iguaná. Estos dos grupos milicianos le apuntaron a la construcción de milicias en los frentes obrero y estudiantil.

En la ciudad se consolidan estrategias de control y fragmentación.

Desde entonces, se comenzó a hablar del *urbanización del conflicto político armado interno* en el sentido de colocar a la ciudad como el escenario ascendente y si se quiere, privilegiado, de la guerra, desarrollando labores de orden estratégico como el control sobre corredores de acceso y sobre las redes viales y de flujos, así mismo, como expresiones de poder político estableciendo formas de “gobierno y administración de justicia” y controlando, de alguna manera, la distribución de bienes y servicios para la población.

En este contexto, asistimos a un **nuevo cambio cualitativo** muy importante: Ya no se trataría de simple confrontación entre bandas sino que estaríamos ante la confrontación de ejércitos, que buscan desplazar al “enemigo” del dominio territorial, como objetivo de guerra. En este campo, las Milicias se constituyen en el primer fenómeno de escenificación urbana del conflicto armado interno.

¿Cómo funcionan estos grupos milicianos? Poseen un vínculo que podríamos denominar orgánico y, simultáneamente, despliegan actividades inorgánicas con miras a su supervivencia urbana. De acuerdo a lo anotado anteriormente, reciben órdenes o directrices de los Comandos Centrales de los grupos insurgentes para realizar acciones de sabotaje, asesinatos selectivos y sobre todo realizar labores de inteligencia en las ciudades; sin embargo, muchas de sus acciones están marcadas por la iniciativa propia, por sus propias evaluaciones tácticas. Al parecer, cada grupo miliciano urbano se descompone en pequeños grupos, entre

los barrios San Javier, 20 de Julio, La independencia y la comuna 13 en la zona Centroccidental, también en Guayabal, Belén Rincón de la zona Suroccidental y en el 12 de Octubre, Aures y Picachito de la zona Noroccidental; las Milicias Obreras, el Inconforme Popular, Milicias Compañero Martín.

“cinco hombres como mínimo y doce personas como máximo, formando una célula guerrillera, la cual opera en determinado barrio. La agrupación de varias células es lo que configura un frente urbano ... Es práctica común por motivos de seguridad que el grupo que se encuentra en un barrio desconozca la identidad de los miembros de otras células ...”(Análisis e Inteligencia.com, 2002:2)

Según cita este documento, dentro de las principales tareas que tienen que cumplir estos milicianos revolucionarios, se destacan la recolección de información para la estructura de inteligencia de las FARC por ejemplo, y que será utilizada para determinar qué personas son objetivo potencial para un secuestro. Igualmente, tienen la tarea de cobrar los impuestos de guerra denominados *vacunas* a comerciantes e industriales de la ciudad. También se constituyen en el primer vínculo de negociación entre los familiares de personas secuestradas para el pago del respectivo rescate.

De hecho, la red urbana Jacobo Arenas y la Compañía Hermógenes Maza, vinculadas a las FARC han actuado en los barrios Santo Domingo Sabio, La Avanzada, La Esperanza y El Trébol. Las Milicias Bolivarianas, vinculadas al 34 frente extendieron su actuación a San Javier y La Loma.

Por la misma época surgieron las Milicias Populares Revolucionarias, de clara influencia de la Corriente de Renovación Socialista y que se ubicaron en las partes más altas de la zona Centrooriental, específicamente en los barrios Belencito, La Independencia y 20 de Julio y en el barrio Castilla de la Noroccidental.

Este acelerado crecimiento que en la década de los 90's viven los grupos milicianos corresponde más a la necesidad de la población de resistir el embate de las viejas bandas ligadas al narcotráfico y a la necesidad de autodefensa frente a la delincuencia de todo tipo, pero no se corresponde con una lógica revolucionaria, con una línea programática, con una política al mando, por una coordinación

centralizada. En un espacio así construido lo lógico era que aparecieran –como se dio- jefaturas individualizadas, centradas en el poder carismático del líder miliciano.

Posteriormente, hacia 1996 irrumpen las Autodefensas de Carlos Castaño, a través del Bloque Metro –se ubicó en los barrios Zamora y Paris de la comuna 5- y Cacique Nutibara. También entre 1996 y 1997 aparecieron los Comandos Armados del Pueblo (CAP)⁴³ centrando su accionar inicialmente en la zona centroccidental de la ciudad, a través de los barrios Belencito, La Independencia, 20 de Julio y Juan XXIII de la comuna 13, y se manifestaron como grupo independiente tanto de las FARC como del ELN, aunque al parecer recibe apoyo logístico y militar de este último.

Las milicias hasta mediados de esta década se consolidan sobre la pretensión de procurar la provisión de derechos sociales y económicos y garantizar la seguridad colectiva. Esto les genera reconocimiento y les diferencia de los combos, a los cuales combaten.

Es importante reseñar que hasta la fecha, fuera de actos aislados como acciones de terrorismo, las milicias realmente no han desarrollado acciones ofensivas contra los organismos estatales. Por tanto, no han correspondido a las estrategias propuestas de guerra urbana, pese a que organizaciones como las FARC han logrado trasladar a la ciudad a algunos combatientes.

Al imponer formas disciplinarias e incluso actitudes morales, todas de corte draconiano, se cae en excesos que le restan apoyo social a las milicias. En

⁴³ Es importante anotar que los rangos de edad de todos estos combatientes se ubica entre los 23 y 28 años, es decir, se trata de jóvenes desesperados unos por las condiciones de miseria, otros hastiados de los atropellos de la delincuencia común y otros de una fuerte convicción anticomunista. Todos ellos recurren a su vez a pobladores más jóvenes, entre los 16 y 25 años, que son obligados a entrar a estos grupos, bien sea engrosando las filas de combatientes, o brindando colaboración proporcionando información sobre los movimientos de la gente, rutas de buses, etc. Cada vez la población de estos actores armados es más joven.

muchas ocasiones, bajo el amparo miliciano, se utiliza la violencia y la intimidación para ocultar intereses particulares –cobran cuotas de protección, realizan atracos, asesinan y destierran a líderes naturales contrarios que difieren de su accionar- lo que, paradójicamente, acentúa los desarraigos, la estigmatización y la pobreza. De esta manera se desvirtúa su sentido público.

La opinión ciudadana se expresó en términos de apoyo inicial a las milicias, pero luego se cayó en un desencanto. Muchas personas no expresaron sus desacuerdos con la forma indiscriminada de los ajusticiamientos, pues se pasó a ejecutar a personas por cualquier cosa, en un proceso creciente, Se mataba por simple sospecha, aunque luego se pudieran reconocer las “equivocaciones”. El apoyo ciudadano decayó y se incrementó la presencia paramilitar. Hoy se habla de que los paramilitares controlan el 75 % de los territorios populares de Medellín, en un proceso que se relata más adelante en este texto.

Recientemente, y a raíz de la arremetida estatal contra los bastiones de milicianos⁴⁴, el frente Luis Fernando Giraldo del ELN, que opera en Medellín, explicó el porqué de la presencia de ellos:

”La ciudad es la retaguardia enemiga y es allí en donde concentra su fuerza represiva, su principal accionar ideológico y su reserva estratégica. La disputa de los centros urbanos es un asunto nodal para el estado. (...) Con el aumento de la población urbana aumentó nuestra presencia, pero aumentó nuestra vulnerabilidad ante el accionar militar. (...) La guerra que se vive en el país, y tiene expresión en las ciudades, es solo causa de la desigualdad, la exclusión y la falta de oportunidades a que son sometidos los sectores populares. (...) La guerra continuará hasta que se resuelvan

⁴⁴ Quizás el hecho más reconocido mundialmente, pues los medios masivos le otorgaron gran despliegue, fue lo que el Alcalde municipal, Dr. Luis Pérez denominó, “el rescate de la comuna 13”.

las deudas sociales, económicas y políticas de la dirigencia con su pueblo...”(El Colombiano, 2003:12ª)

El mensaje es bastante claro: No habrá paz mientras no se haya justicia social y sea derrotada la pobreza.

Pero las milicias urbanas, antes que responder a una estrategia de confrontación radical con el Estado y enarbolar banderas políticas contestatarias, comenzaron a desarrollar un proceso de construcción de poder, copando los espacios que el mismo Estado dejaba abandonados. Fue así que se hicieron fuertes y ganaron adeptos en territorios pequeños y donde cumplieron labores policiales, particularmente de confrontación y exterminio con bandas delincuenciales, en una suerte de “limpieza social”⁴⁵. Las tareas específicas que se propusieron fueron: vigilar los límites de las barriadas populares, protegiendo a los vecinos, e incluso a los empleados de empresas de servicios públicos, de las bandas juveniles, de los escuadrones de la muerte y de las bandas sicariales y actuar como mediadores y árbitros en los conflictos entre vecinos o en el seno de las mismas familias (Jaramillo, 1994: 27)

Esta fue una forma muy peculiar también de desarrollar procesos de identidad, de inclusión: el territorio, sobre el cual el actor armado ejerce su dominio, cubre con su manto e *incluye* a los pobladores, al menos vinculados por una relación de contigüidad espacial, pero que también tienen ciertas características, que les diferencia de los “otros” –este es “nuestro barrio, nuestra cuadra, nuestro sector”-

45 En declaraciones a la prensa el General Mario Montoya Uribe, comandante de la IV Brigada con asiento en Medellín, decía que “Las milicias de las FARC y el ELN tienen varias misiones: reclutar combatientes para los grupos rurales, recaudar fondos mediante la extorsión y el secuestro para financiar los comandos rurales; establecer núcleos de propaganda para la organización; servir como retaguardia para los combatientes enfermos porque muchos de ellos están llegando a reponerse a Medellín”. (El Colombiano, “Guerra Urbana no ha prosperado”, 2002).

y se les defiende⁴⁶. En estos territorios no se puede penetrar impunemente, se requiere salvoconducto. Ahora bien, en reciprocidad, el grupo armado exigió inicialmente reciprocidad y luego apoyo logístico y económico.

Existe una pretensión clara de legitimidad por parte de las milicias, pues se consideran verdaderos representantes de la comunidad que padece las injusticias. Su legitimidad deviene de la defensa que hacen de la vida, la propiedad y la integridad de los pobladores y del uso de la violencia como instrumento de cambio social, como medio para imponer “el nuevo orden”.

Como reacción al dominio territorial que, en buena parte de la geografía colombiana y en particular en las ciudades, venían ejerciendo los grupos subversivos, unido a la ineficiencia de los organismos armados oficiales, surgieron los *paramilitares*. Su crecimiento y su violencia fueron meteóricos en comparación con el de las guerrillas, quizás por el sospechado apoyo del ejército y los organismos de seguridad. Al parecer no han tenido una dirección unificada y coherente, sino jefes independientes. Así se viven procesos de resignificación del espacio urbano.

En la ciudad se siguió el mismo modelo agrario de penetración paramilitar, se conformaron las llamadas “cooperativas de seguridad Convivir”, que fueron auspiciadas por el gobierno departamental desde la época del gobernador Álvaro Uribe Vélez que con la idea de la autodefensa, se insertaron como parte de una política que pretendió controlar simultáneamente la criminalidad y la insurgencia. A partir de allí se dió la proliferación de cuerpos armados (informantes, policía secreta, grupos de choque, etc.) en función de la lucha contrainsurgente.

⁴⁶ Paradójicamente estos grupos armados, milicianos por ejemplo, defendieron principios que en comienzo son refuerzo del orden que se supone combaten: los valores de la familia, las sanas costumbres, la no violencia Intrafamiliar, la no promiscuidad, etc. fueron prohijados por ellos.

Es de resaltar el hecho que estos actores sociales y políticos, transformaron a muchas bandas delincuenciales y las colocaron a su servicio, de hecho, les brindaron entrenamiento militar, mejoraron su capacidad de combate y, en muchos casos, mejoraron su armamento. La particularidad de esta relación consiste en que se permitió que las bandas continuaran con sus modalidades delictivas – robos, asaltos bancarios y transportadoras de valores, homicidios, secuestros, piratería terrestre, etc.- pero se les sometía y/o contrataba sus servicios.

Los “paras” se dedicaron inicialmente a someter a las pandillas, cooptaron algunas, contrataron otras y exterminaron a las que se les resistieron, igualmente su accionar se orientó prioritariamente a combatir a los grupos milicianos e insurgentes. Para estos propósitos coparon territorios, realizando actividades de patrullaje y toma simbólica a través de graffitis.

El poder del paramilitarismo deviene de dos hechos: de un lado, su indudable ligazón con el narcotráfico, que les proporcionó el mejor armamento del mercado mundial y el dinero para seducir a los integrantes de milicias y bandas, de otro lado, su accionar se realizó bajo el amparo y protección de los organismos estatales de seguridad, quienes han estado interesados en “liberarse” del peso guerrillero y delincencial presentes en los barrios.

Pero acá surge una discusión que se me antoja interesante: ¿Se trata de actores sin conciencia? ¿Actúan solo mediados por el dinero?. A mi modo de ver, si bien es cierto que muchos de sus líderes y militantes han ingresado al paramilitarismo por dinero y para proteger exclusivamente el negocio del narcotráfico, también considero que es cierto que algunos de estos líderes y actores paramilitares han desarrollado un sentimiento de profundo anticomunismo y cada vez cohonestan menos con el narcotráfico. Como modelo de estas perspectivas, hasta que se

demuestre lo contrario, podrían ser los enfrentamientos intestinos que llevan en esta ciudad los bloques Cacique Nutibara y Metro⁴⁷.

Por supuesto no quiero significar que posean una ideología propia y mucho menos, que están adscritos a un novedoso proyecto militar y político. Sin embargo conviene recordar que en los estatutos de las autodefensas, que fueron aprobados en 1996 y refrendados en Diciembre de 1997 se estableció claramente que se trata de “una organización político-armada y antiterrorista de carácter civil. Supuso, como en reiteradas ocasiones lo expresaron sus máximos jefes –Carlos Castaño y Salvatore Mancuso- que se mantendrán en actividad hasta que se termine la guerrilla. Si esta desaparece, es derrotada o pacta con el Estado, la razón de ser de las autodefensas, automáticamente las obliga a desmovilizarse.

Habría que incluir a otro “grupo” -que según los politólogos no se constituye en actor social, en la medida que hacen parte legal del Estado y el gobierno- pero que es parte fundamental en el complejo panorama de la confrontación. Nos referimos a la Policía Metropolitana, a la IV Brigada del Ejército, a la Fuerza Aérea Colombiana, a la Fiscalía, el CTI y el DAS, quienes tienen la obligación de la necesidad de proteger los corredores estratégicos de movilidad que conducen a la ciudad y que la comunican con el departamento y el resto del país; infraestructuras viales, geográficas, diversidad e hidrología (dada su cercanía a las carreteras al Mar, puerta de acceso a la región de Urabá, a la Costa Atlántica, al Magdalena Medio y a los ríos Atrato, Cauca y Magdalena.). También controlar el Oriente antioqueño que además es una zona agraria y de producción de energía eléctrica,

⁴⁷ Las autodefensas de Castaño y Mancuso iniciaron con la administración de Uribe Vélez un proceso de negociación, que en comienzo involucra a todas las AUC, sin embargo algunas frentes como el Bloque Metro que tiene influencia en el Oriente y Nordeste antioqueño, además de varias comunas de Medellín y que cuenta con cerca de 1.500 hombres, no aceptan estas negociaciones pues, como dice su comandante “Rodrigo” o “doble cero” hay 2 nudos: uno, el esquema de negociación es de un *sometimiento a la justicia – desmovilización de tropas y cese de hostilidades- por parte de las AUC, sin margen para debatir sobre mecanismos que sirvan para la paz; y dos, el problema del narcotráfico con sus consecuencias de dineros ilícitos (los capitales que ha creado), contrarreforma agraria (las tierras adquiridas por los narcos) y situación jurídica de los líderes de las AUC con pedidos de extradición de Estados Unidos. Por supuesto, este Bloque es conciente de su aislamiento político y militar (El TIEMPO, 2003:1-5)*

que comunica con el eje cafetero, y otros sectores que sirven de canales para desplazarse hacia el sureste. Todos son sitios claves donde se desarrollan importantes megaproyectos económicos y que permiten la salida e ingreso del comercio.

Sin embargo el brutal accionar de estos organismos de seguridad estatal sobre los delincuentes y su, paradójica, participación en la comisión de delitos refuerzan la imagen de deslegitimación del Estado frente a las comunidades que dice servir. Ello retrotrae lo público e incrementa la presencia privada en la gestión de la seguridad barrial.

Cientos de familias de diferentes zonas de Medellín se han encontrado en medio de la confrontación entre los organismos de seguridad del Estado, la guerrilla y las autodefensas quienes luchan por el control de aquellos barrios, cuya ubicación es considerada estratégica debido a los corredores que comunican sus “laderas con algunos municipios del Nordeste y del Oriente cercano”, en donde los frentes rurales de la insurgencia y el paramilitarismo históricamente han reclamado, y a la vez dotado, el abastecimiento, la munición y las vías de ingreso y salida a todo el Valle del Aburrá.

Los enfrentamientos incrementaron la movilidad intraurbana.

La evidente crisis de control social lleva a que la violencia invada todos los espacios, incluso los más resguardados y que las infracciones a los derechos humanos se multipliquen. El sistema escolar, solo para tomar un ejemplo, se ve envuelto en medio de los combates, las escuelas se convierten en trincheras y en refugio para los combatientes. Aún más, en estas instituciones se viven procesos de *ajustes de cuentas* entre pandilleros de todo tipo.

Así se debilitan los lazos sociales tanto vecinales como institucionales.

Como resultado se incrementa la movilidad intraurbana, pero no a causa de la búsqueda de mejores oportunidades, o por cambios en el lugar del trabajo u otras causas que son tan corrientes en las explicaciones de la planificación urbana, la sociología y la antropología, sino producidas por un desarraigo –territorial y familiar- obligado por un desplazamiento forzoso, en una suerte de destierro, en una huida apenas lógica de la población civil de los frentes de guerra.

A manera de ejemplo traemos este recuento desgarrador:

“Las 40 casas de la manzana, a lo largo de la calle 34B con carrera 111C, entre los sectores 20 de Julio y Betania, ya estaban desocupadas hacía dos meses, desde que la guerra entre las milicias y autodefensas se recrudeció y los muros de las edificaciones empezaron a sacudirse con las esquirlas de las granadas y las ráfagas de los fusiles. Los únicos que decidieron quedarse entonces fueron Luisa y su esposo, empeñados en salvar los diez millones de pesos que dos años antes pagaron por su vivienda con un préstamo del que aún deben la mitad. Por eso persistieron y mandaron a los niños a la casa de la abuela, en Guayabal. En esos días, a comienzos de febrero, el tropel de los que huían comenzó a ser tan vertiginoso que muchos dejaban camas, trastos de cocina, estufas, cuadros colgados en las paredes y mascotas, en total cinco perros, tres gatos y una coneja de orejas grises que terminó muerta de un susto después de la detonación de una papa explosiva.” (José A. Castaño, 2002)

Por supuesto, esta situación es corriente en muchos de los barrios de la ciudad, pero se consideran críticos: Santo Domingo Sabio⁴⁸, Popular, Ocho de Marzo⁴⁹,

⁴⁸En este barrio es corriente que milicianos del ELN, vestidos de civil, patrullen el sector.

Veinte de Julio, Belencito, Blanquizal, Villa Laura, Betania, Trece de Noviembre, Villa Tina, La Sierra, El Pinal, Los Mangos y Efe Gómez, solo por mencionar algunos y que tienen en común ser barrios de las periferias en los que, “denuncian los habitantes, hay cuerdas desoladas, marcadas por el abandono y los graffitis en aerosol en los que los grupos armados se retan a muerte y se culpan de la desgracias de los que se marchan” (Ibídem)

Los barrios Santo Domingo I y II y Popular I y II ha sido escenario de diverso enfrentamientos y de cambios en el control zonal: algunas bandas que se han colocado al servicio de los paramilitares –recordemos que esta estrategia de sometimiento de estas formas de delincuencia por parte del paramilitarismo, fue una estrategia copiada de los mismos comienzos de presencia insurgente en la ciudad- para enfrentar grupos de “milicianos insurgentes”. Allí encontramos bandas como La 38, La Caseta, El Hueco, La 100, Los Costales, Los Patiamarillos, Los Triana, Estrella Roja y El Sanduche. Su presencia a intensificado la movilidad en estos barrios.

Merece mencionarse la banda de Los Nachos, surgida hacia 1985 en el barrio Popular I. Esta banda debe su nombre a un joven llamado Ignacio, quien había recibido instrucción militar por el M19 dentro de sus “campamentos de Paz”. Esta banda siempre actuó independientemente del narcotráfico, aunque se alquiló al mejor postor.

También las bandas sicariales y de delincuencia organizada han sido actores de primer orden en este proceso migratorio interno. Muchas bandas prevalidas del poder que otorga la metralleta y el dinero, procedieron a desalojar familias enteras, a violar sus mujeres, a matar a otros jóvenes por la simple sospecha de ser soplones o amigos de otros “combos”.

⁴⁹Uno de los barrios más periféricos en la zona oriental, en comienzo dominado por los milicianos del ELN, pero hoy controlado por las autodefensas del Bloque Metro.

El costado occidental de Medellín –corredor estratégico- ha sido uno de los más sacudidos por los choques armados entre ilegales. Allí tienen asiento milicias del ELN, de las FARC, los Comandos Armados del Pueblo (CAP), y es permanente la incursión de grupos de autodefensas. En los barrios Robledo, San Javier, 20 de Julio, La Independencia, Vallejuelos, La Independencia, Belencito, Blanquizal y la parte alta de La América, Guayabal, Belén, El Rincón, 12 de Octubre y El Picachito los jóvenes milicianos que han controlado buena parte de estos barrios, integraron a los Comandos Armados del Pueblo (CAP)

En Castilla, se afincaron los Comandos Obreros Populares (Milicias Populares de Liberación), surgidas como disidencia del Ejército Popular de Liberación (EPL). En tanto que en algunos sectores de la zona centrooccidental y en particular en el barrio La Iguana –zona tugurial estratégica en la medida que dará acceso a uno de los megaproyectos de ingeniería antioqueña como es el Túnel de Occidente, y ubicada en el costado occidental inmediato del río Medellín, se ubicaron las Milicias Bolivarianas, las cuales son orgánicas de las FARC.

Igualmente, en las laderas de la zona periférica oriental que da acceso a la Valle del oriente antioqueño, en donde afinsa sus raíces el Bloque Carlos Alirio Buitrago del ELN, las autodefensas del Bloque Metro, que fue el primer grupo paramilitar y funcional a las ACU de Castaño y Mancuso conformado en la ciudad, intentan cerrar un cerco, entre los barrios de invasión Carambolas, Santo Domingo, La Esperanza, Carpinelo, María Cano y La Sierra, es decir entre las Comunas 3 y 8. Para esta estrategia, las autodefensas infiltraron los Núcleos Revolucionarios 6 y 7 de Noviembre de las milicias del ELN, les ofrecieron dinero y muchos integrantes de la insurgencia, como se dice en el lenguaje popular, “*se torcieron y comenzaron a dar dedo*” a sus antiguos compañeros de lucha.

En la parte alta de la zona oriental, en los barrios Versalles y Manrique, se siente la presencia de la Milicias Populares Revolucionarias. Muchos de sus miembros son venidos de la vieja Corriente de Renovación Socialista.

Los habitantes de estos barrios populares, lógicamente, se sienten abandonados a su suerte. Toda clase de atropellos se sucede por parte de los actores armados, y la negligencia o el temor de los representantes de los organismos estatales, e incluso, de derechos humanos no les escuchan, ni investigan sus denuncias.

El control que ejercen los actores armados –milicias, paramilitares, bandas juveniles, delincuencia organizada- no solo implica el control sobre la movilización de la población, pues incluso el acceso y la movilidad por los barrios tiene que ser pactada y autorizada por quien ejerce el poder en él y se hacen los respectivos retenes para investigar quién se transporta en los buses, en los colectivos y en los taxis, pero además se ejerce el control sobre los alimentos y los medios de transporte. Es el ejercicio del dominio en toda la extensión de la palabra.

Se volvió corriente en todos estos barrios, que las viviendas se colocaran al “servicio de los guerreros” pues, en casos de combates, era obligatorio abrirles las puertas para que se parapetaran o se refugiaran según el caso –de no hacerlo la expulsión y pérdida de la propiedad, o de la vida- pero además, se debía financiar a los combatientes quienes comenzaron a “cobrar” por el servicio de vigilancia y “limpieza” del barrio. Todos debían aportar los “impuestos” decididos por los actores armados: los pequeños negocios de expendios de bebidas, de víveres, de servicios, los distribuidores también tenían sus cuotas para poder ingresar al barrio... “Aquí todos pagan”.

Es evidente el incremento de la *victimización* de la población civil, no solo durante los momentos y las zonas de combate. Se produce con mayor rigor en la violación

de derechos humanos y mayor vulneración de la población civil, por parte de todos los actores armados, organizados o no.

Una ubicación, aunque muy general, de todos estos actores armados puede ser la siguiente:

LOS BARRIOS Y LAS BANDAS

BARRIO	BANDAS
ZONA NORORIENTAL:	
Manrique Oriental	Milicias populares Revolucionarias, La 30 u oficina, Los Marines, La 41, Los Píldoras, Los Tobis, Los Chiches, La Terraza ⁵¹ y La Montañita
Manrique Transmayo	La Batea y La 30
Manrique- Los Balsos	Milicias Populares Revolucionarias
Versalles	Los Triana ⁵²
Santo Domingo	La Torre, La 29, La Silla, El Trébol, Estrella Roja.
La Frontera Popular ⁵⁰	Los Triana, Cañada Negra
Nuevo Horizonte	Los Costales, Los Nachos, Los Patillones,
Villa del Socorro	Cañada Negra, los Calvos.
Playón de los Comuneros	Los Joyeros
San Pablo	Los Champús, los Nachos.

⁵⁰ Aquí nacieron “los capuchos” como grupo de defensa comunitaria enfrentados con la banda de Los Calvos.

⁵¹ Proviene de las viejas estructuras delincuenciales armadas de bandas ligadas al narcotráfico –al ala militar del extinto Cartel de Medellín, y ligados a grupos paramilitares posteriormente- lo mismo que las bandas de los Priscos, la Ramada, los Mecatos, los Nachos, los Killer y los Nachos entre otros.

⁵² Esta banda, que ejerce influencia en casi toda la comuna nororiental, tiene cerca de 300 hombres y se ha colocado al servicio de las AUC, específicamente al Bloque cacique Nutibara. lo mismo que sucedió con la banda de Los Cacaos del barrio Aures.

<p>La Cruz Belloriente Carpinelo Carambolas Andalucía La Francia Granizal Santa Rita Zamora Moravia. Aranjuez Santa Cruz</p>	<p>Los Triana, Cañada Negra Los Triana Bloque Cacique Nutibara Bloque Cacique Nutibara Bloque Cacique Nutibara Bloque Cacique Nutibara. La 49 La Cancha, La 38, El Plan Los Triana Bloque Metro. Los Tubos, La Terminal, La Arboleda El Hueco, La 103, La 100.</p>
<p>ZONA CENTROORIENTAL: Caicedo La sierra Caicedo Enciso Boston La Milagrosa Buenos Aires El Salvador San Diego</p>	<p>Bloque Metro, El Morro, La Libertad Los Mexicanos Los Concejos, De Praga, Las Castas Marquetalia, El Alacrán, El Nacional, Pablo Escobar Los Cerros, El Mayey o Caunces, El Plan, Del gordo o David. El Salvador El Buda</p>
<p>ZONA NOROCCIDENTAL: Aures Robledo La Iguana Antonio Nariño El Pesebre</p>	<p>Los Cacaos, Depósito, El Chispero Comandos Armados del pueblo, Los Búcaros, La Oficina, Los Gómez, Matallana, El Hueco, La Cuchilla La Iguaná Los Cuquitas Beto, Los Ranchos, La 115</p>

<p>Santander Picachito Doce de octubre Castilla Alfonso López Kennedy París</p>	<p>Picachito, Los Rieles o Los Palomares. Los Sotos, De Guisao, Los Caretrapos, La 30 del doce Milicias Populares, Los Machacos, Los Mondongueros⁵³, El Carrusel, Los Lecheros, La 98 o sancochos, La 70, La Imperial Los Cola y pola. La Oficina</p>
<p>ZONA CENTROOCCIDENTAL: San Javier Vallejuelos – Blanquizal Belencito Corazón</p>	<p>Bloque Metro, La banda de Frank, Los Tintos fríos, Los Ranchos Los paras, Comandos Armados del pueblo (CAP). Comandos Armados del pueblo Los Cobres, Los Zaros, Los Colchoneros, El Socorro Los CAP</p>
<p>CORREGIMIENTO DE ALTAVISTA Altavista</p>	<p>Los Chivos, Autodefensas, Los Mister o Sabor Latino, Los Piñeros</p>
<p>ZONA SUROCCIDENTAL: Barrio Antioquia</p>	<p>Los Ranchos, Los Coquitos, La 24, La Estefanía, La Cueva</p>

⁵³ Hoy al servicio de las AUC, pero anteriormente tenía vínculos con las FARC.

La Raya Las Violetas	La Raya, El Bolo, San Rafael, Combo de Tavo Las Violetas, Los Magníficos, Las Mercedes, Belén Zafra.
CORREGIMIENTO S. CRISTÓBAL: San Cristóbal	San Cristóbal, De Piru
CORREGIMIENTO DE S. ANTONIO DE PRADO: San Antonio de Prado	Limonar I y II

Fuente: Elizabeth Yarce, 2002 y archivos de prensa.

En negrilla están los grupos ligados a las Milicias.

Un relato muy diciente lo extractamos del periódico El Colombiano, de un habitante del barrio 20 de Julio, ubicado en la Comuna 13, al centro-occidente de Medellín:

"Por culpa de las milicias no volvió a subir el carro de la cerveza, ni el de las arepas, ni el de los cigarrillos, tumbaban lámparas de los postes y quedamos sin energía porque no podían subir tampoco los de Empresas Públicas. Últimamente sólo podía subir el carro con el pollo.

Cinco grupos pedían vacunas y a la hora de la verdad eran los mismos. El año pasado nos pidieron \$5 millones, les dijimos que no teníamos, entonces decían que hipotecáramos la casa, que vendiéramos lo que pudiéramos o sino mataban a mi mamá. Empezaron a llamar. Llamaban y llamaban y nos decían que ya habían matado a otro por no pagar. Así siguieron hasta que nos tocó endeudarnos para conseguir esa plata. Estuvimos mal del todo y ellos seguían aquí, haciendo retenes. Nos tocó tirarles la plata en una bolsa por el balcón, como si nada.

Para colmo, a pesar de que ya habíamos pagado esa vacuna nos tocaba pagarles, obligados, entre \$8.000 y \$15.000 semanales y que si denunciábamos algo a las autoridades no volvíamos a ver a la hermana que trabajaba. Así, le tocaba a uno vivir en este barrio. Vimos matar muchos comerciantes, entre ellos al de la carnicería. Mataron también muchas jovencitas que se las llevaban, les hacían de todo y después las tiraban.” (Carlos A. Giraldo, 2002)

Se cuenta que en medio del combate por la “recuperación” ordenada por el Alcalde Municipal de la comuna 13⁵⁴, en el 2002, la escuela del barrio Vallejuelos, que es una de las pocas construcciones en material del sector –el resto son ranchos de madera- fue convertida en trinchera en medio de los combates.

Pero la guerra no se libraba en los espacios de los barrios populares, sino que traspasaba esas fronteras invisibles, de allí que los grupos de milicianos por ejemplo, encontraron en la industria del secuestro una verdadera veta lucrativa y cualquier muchacho de clase alta representara la posibilidad de una extorsión segura. Por eso, muchos habitantes de estos barrios como El Poblado por ejemplo, pierden su noción de ciudad y sólo conoce las transversales de este barrio, desconociendo todo fuera de esa ruta, su habilidad más allá de esas fronteras desaparece, y se llenan de pánico, el centro histórico de su ciudad no les dice nada y solo lo han atravesado en sus vehículos. Es “como si cruzaran un lindero invisible hacia una dimensión desconocida, plagada de seres peligrosos, come carne y tira fuego.”

Por supuesto no es temor enfermizo, es el resultado de los medios de comunicación y de las mismas estadísticas: en el Centro y los barrios periféricos

⁵⁴La Operación Orión, fue adelantada por las autoridades en la Comuna 13, al occidente de Medellín y contra los frentes urbanos de las FARC, del ELN y de los CAP. La comuna se presentó como una zona controlada totalmente por las milicias populares al servicio de la insurgencia, desconociendo el incremento del control paramilitar en la zona, hecho que posteriormente fue denunciado por líderes comunales.

se cometen diez de los doce asesinatos que hay en la ciudad al día, allí esconden el 90% de los carros hurtados en la ciudad y se enfrentan los guerrilleros y las autodefensas, igual que en la zona rural, con fusiles y con bombas.

Así se acentúan las fronteras invisibles y se reconocen los espacios de guerra.

Las estrategias dominantes de estos diferentes actores apuntan a la construcción de micropoderes, a lo que las FARC denominaron “cerco periférico”, a la territorialización del poder que, por supuesto, supone y es concordante con la territorialización de la violencia. Se trata de ir progresivamente copando cada uno de los espacios de la ciudad, determinando el uso del espacio e incluso, su simple tránsito. Ello va creando *fronteras invisibles*. Nos encontramos ante un proceso cíclico, que se retroalimenta: Se destruye tejido social, se incrementa la violencia, se fortalecen las fronteras invisibles y se enajena la ciudad como un todo para los ciudadanos.

No obstante, me parece importante anotar que pese a la estrategia miliciana y subversiva de cerco sobre la ciudad, en lo que va corrido de esta centuria, el control paulatinamente ha ido pasando y consolidándose en favor de los grupos de autodefensa ligados al paramilitarismo, en particular, en beneficio del Bloque Cacique Nutibara, liderado por alias “Don Berna”.

LAS LUCHAS POR UN PACTO DEMOCRÁTICO

Cuando se habla de luchas por un pacto democrático, estimo que se hace desde la perspectiva de resaltar tres condiciones indispensables:

- Participación y seguridad ciudadanas.
- Vigencia plena de los Derechos Humanos.
- Fortalecimiento del aparato judicial.

El cumplimiento de estas condiciones conducen necesariamente a una mayor concurrencia de la ciudadanía y de las autoridades en el trámite pacífico de los conflictos y, por supuesto, a la promoción y defensa de los derechos humanos y el énfasis en las acciones preventivas sobre las simplemente represivas, para combatir el delito. De esta manera considero que se tendrían los pilares de un verdadero "Programa de Convivencia y seguridad ciudadana" que tanto se reclama para nuestras ciudades.

Las explicaciones a la presencia de actores armados y organizados tienen naturaleza muy variada: unos dicen que se trata de la "urbanización del conflicto armado"; es decir, del incremento de las acciones de los actores de la guerra interna en la ciudad. Otros indican que son apenas repercusiones de la lucha contra el crimen organizado. Otros señalan que el centro del problema "no es la lucha territorial entre guerrilla y paramilitares sino que la violencia tiene origen, en buena medida, en las políticas de exclusión y represión del Estado local contra las masas de pobladores pobres de las laderas de Medellín".

Lo cierto del caso es que el experimento que vivió la ciudad de políticas represivas, de mano dura, siempre fracasó, entre otras razones porque se trata de aparatos de seguridad o represivos mal informados, que desconocen las zonas, con muy poco apoyo político y muy mal servidos, pues muchos de sus agentes han sido corrompidos, por ello se insistió, y se sigue insistiendo, bien, en pactar el silencio de la armas, o bien, en una política social focalizada en los más pobres. Se olvidan de la concertación como mecanismo de democratización.

Por supuesto que también han quedado enseñanzas y estrategias que requieren de mayor reflexión. Los primeros pasos de las negociaciones con los grupos milicianos produjeron algunos desarrollos participativos y elevación de conciencia

comunitaria. Así lo relata la investigadora de la Universidad de Bradford, Inglaterra, Geraldine McDonald (1998):

“Las negociaciones de las milicias de las MPVA –Milicias Populares del Valle de Aburrá- gozaban de popularidad por parte de la comunidad en la cual operaban las milicias. Se estableció un grupo de trabajo y la comunidad era consultada cuando debían tomarse decisiones importantes. Los convenios logrados a partir de las negociaciones incluyeron planes para el desarrollo local, para la consolidación de las organizaciones comunitarias y para los *gestores de paz*, quienes eran tanto ex-milicianos como miembros de la comunidad. Con posterioridad a los convenios se estableció un centro para la resolución de conflictos en el barrio de Moravia/El Bosque, donde los líderes de la comunidad y un puñado de ex-milicianos ahora dirimen sus conflictos. El centro ha sido un éxito y ha servido de modelo para otro centro similar en el barrio de Andalucía.”

...

“Una formación que aliente a la gente a exponer concienzudamente sus diferencias y a tratar de entender el punto de vista de unos y otros en vez de recurrir a la violencia como una respuesta inmediata a los problemas, sería magnífico para aumentar el nivel de tolerancia y lograr un ambiente más pacífico.

Pero esta no fue nunca la perspectiva dominante, al punto que puedo afirmar que el conjunto de los asuntos problemáticos que directamente han afectado la convivencia han sido enfrentados con enfoques que han fracasado, en la medida que han sido respuestas *externas*, en donde la participación comunitaria ha sido excluida en lo técnico y discriminada en lo político⁵⁵.

⁵⁵ Conviene destacar que se han hecho intentos, desde la misma comunidad, para enfrentar las situaciones problemáticas, basta mencionar “el plan alternativo de desarrollo de la zona nororiental o Plan Alternativo

Al despuntar los años 90, el gobierno del Presidente Cesar Gaviria recogió las recomendaciones elaboradas por “la comisión de violentólogos” y planteó como política para enfrentar el problema de la violencia en Medellín la ESTRATEGIA NACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA y el PROGRAMA PARA LA PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA PACÍFICA. Estas buscaban inicialmente recuperar para el Estado el monopolio del uso de la fuerza, lo cual implicaba el desarme de la sociedad civil. A renglón seguido se establecía la defensa de los derechos humanos y el fortalecimiento de la justicia para sancionar el delito y evitar la impunidad. Sin embargo, se encontraron dificultades de diferentes órdenes y fue muy poco lo que se pudo hacer.

En el transcurso de los últimos años, empezando con la Consejería Presidencial para Medellín, que dirigió en primera instancia María Emma Mejía⁵⁶, en la ciudad se han intentado varias aproximaciones en la búsqueda de soluciones al problema de violencia.

A raíz de las críticas que desde diferentes sectores de opinión ciudadana se hicieron a los pactos⁵⁷ establecidos entre distintas bandas o “combos” barriales buscando la *no agresión y el respeto por la vida*, y que contaban con el apoyo de

Zonal (PAZ)” presentado a consideración del Concejo Municipal y da la Alcaldía de Medellín en 1996. Igualmente mencionemos “el Plan de desarrollo participativo de la zona Noroccidental” presentado en 1990. En ambos la participación de mas de 300 organizaciones de los barrios afectados en el Plan demuestra la vitalidad e interés de la comunidad de coger en sus propias manos su destino. Ambos proyectos fueron archivados por la Administración Pública.

⁵⁶ Compañera de Fórmula, en al Vicepresidencia, del candidato Horacio Serpa en su lucha por la primera magistratura del país enfrentado a Andrés Pastrana. Este a la postre fue elegido Presidente del país.

⁵⁷Se trataría de una versión de “pactos sociales” o acuerdos entre grupos sociales organizados (a la manera de la visión neocontractualista de John Rawls) en donde, de una parte, los grupos involucrados –bandas, combos y milicias- determinan “un armisticio razonado” que incluye el respeto por el otro, la no agresión y el respeto por la vida; y de otro lado, la municipalidad quien avala y respalda estos acuerdos garantiza apoyo de seguridad y desarrolla programas de inversión pública, en particular de empleo. Según la Oficina de Asesoría de Paz y Convivencia de Medellín, se desarrollaron 25 pactos de no agresión entre diferentes bandas entre los años de 1998 y 2000

la Oficina Municipal de “Asesoría de Paz y Convivencia”⁵⁸, surgieron voces que señalaron que una clara política y estrategia de gestión del conflicto pasaba por la idea que la paz no se compraba sino que se construía, buscando anular las desigualdades sociales. Es decir, criticaban *la política de apoyos económicos* que en últimas y en la práctica solo beneficiaban a los grupos de actores armados y no a la comunidad en general⁵⁹. Las críticas más concretas y más delicadas que se hicieron en su momento, tuvieron que ver con la compra de armas por parte de las bandas con dinero que estaría destinado a la inversión social en barrios y con el excesivo protagonismo que tomó la Mesa de Trabajo de la Cárcel de Bellavista, que en últimas era la que establecía los términos de los pactos entre las bandas barriales. Esto significaba que se requerían tanto el acercamiento con los actores armados, pero más importante era el apoyo institucional y ciudadano y la inversión social en aquellas zonas geográficas y de pobladores con quienes se tenía “una gran deuda social”⁶⁰.

⁵⁸ La propuesta con la cual nace esta oficina fue la de desarrollar para los actores armados, básicamente los grupos milicianos del ELN y de las FARC un proceso de reinserción a la vida civil, con alternativas de proyectos productivos y desarrollo para las comunidades donde los actores armados operan. El primer gran experimento concluyó el 25 de Febrero de 1994, cuando 650 jóvenes –aunque se estima que esta fue una cifra inflada, para poder tener poder de negociación con la Administración Municipal- de las Milicias Populares del Pueblo y las Milicias Populares del Valle de Aburrá, que habitaban los barrios Popular I y II, La Isla, Santo Domingo y otros barrios de la Comuna Nororiental, Villa del Socorro, Moravia, La Milagrosa, Santa Cruz, parte de la zona centro-oriental, conformaron una Cooperativa de Vigilancia llamada Cooperativa de Vigilancia y Servicios Comunitarios (Coosercom). La misma que no fue acogida por otros milicianos. Muchos de quienes se acogieron a esta Cooperativa fueron asesinados, en medio de luchas intestinas, por poder, por prestigio, por las armas o por ventajas económicas, o bien, sufrieron los efectos de una campaña de exterminio. Coincidió con McDonald, cuando afirma que, en la idea de la Cooperativa, ya existía una suposición fundamental errada al creer que la seguridad privada es un sustituto aceptable de la seguridad estatal en algunas zonas abandonadas.

⁵⁹ Así no se plasmaba la idea de Rawls de construcción de convivencia social sobre la base de principios mínimos de justicia con aceptabilidad general por personas libres e iguales. Los beneficios económicos que favorecieron solo a algunos militantes de bandas, incluso fueron considerados insuficientes por estas, hasta el punto de que a finales de 2000, algunos de los firmantes de los pactos, y que fueron involucrados en programas de empleo como fue el de contratación para hacer limpieza y mantenimiento a las quebradas de Medellín, consideraron que el apoyo estatal era escaso, que el empleo ofrecido duraba poco o que no era para la totalidad de los miembros de las bandas involucradas.

⁶⁰ Cuando se habla de deuda social, se quiere enfatizar en un sistema de intereses públicos y privados que se imbrican en beneficio de los privilegios de unos pocos y en detrimento de los más.

Definitivamente, la estrategia ha consistido en *buscar por todos los medios, disminuir los enfrentamientos violentos*. Así lo que en Medellín se ha llamado “procesos de paz” en la práctica solo han sido negociaciones realizadas por las jerarquías de las diferentes organizaciones armadas –bandas, combos, milicias y recientemente paramilitares- con los representantes del Estado y la Administración Local, tendientes a silenciar las armas. Sin desconocer la importancia de estos acuerdos, que reprimen la violencia y que considero son indispensables para resolver los asuntos de fondo, es claro que no ha habido hasta este momento un proceso continuo tendiente a cambiar las condiciones de exclusión y marginalidad, o si se quiere, de contexto, en las que viven la mayoría de pobladores en territorios donde los actores armados han afincado sus dominios. No ha habido modificación en las condiciones de inequidad social.

Reiteradamente se han realizado prácticas de mediación, tanto por parte de la Iglesia Católica como de instituciones gubernamentales creadas para tal fin, como es el caso de Consejería Presidencial para Medellín y la Oficina de Convivencia Ciudadana, buscando restaurar los ambientes proclives para el diálogo y la negociación entre los “grupos violentos” de todo tipo y el Estado. Definitivamente han tenido una eficacia, que considero muy limitada, en la medida en que sin modificar las condiciones reales de exclusión y sin construir una nueva concepción de democracia, si han servido para desarticular un buen número de conflictos – sobre todo de enfrentamientos entre bandas- y pequeñas violencias.

Sintetizando, podemos indicar que las respuestas que se han aplicado para enfrentar la presencia de actores violentos y organizados, en nuestra ciudad, se pueden dividir, en dos categorías:

- La “Vía Punitiva”, se reclaman acciones directas, “mano fuerte”, de castigo duro a cualquier tipo de infracción y, en consecuencia, se dirigen a

aumentar el número de efectivos policiales, a criminalizar a los menores, y se aumenta el número de cárceles para encerrar delincuentes.

Se ha venido creando la idea de que el mismo Estado, además de los ciudadanos corrientes, son víctimas de los violentos, por ello es necesario apoyar el Estado, incluso tolerando una situación metajurídica, para evitar el desplome total del país y de esta ciudad, ya suficientemente estigmatizada.

- De otro lado, la “Vía preventiva”, que está en oposición a la anterior, y que señala que los resultados del uso de la represión y de la fuerza son pasajeros, pero no solucionan el problema. Sólo se ha logrado equivocadamente criminalizar la pobreza, y profundizar los enfrentamientos sociales, sin cambiar los contextos. Proponen entonces un enfoque preventivo, con la participación de toda la comunidad, y las iglesias, con vigorosos programas de apoyo a los jóvenes desfavorecidos.

La experiencia vivida en la ciudad muestra que es notable el hecho de la falta de continuidad en las políticas para enfrentar la violencia, muchas sin duda bien intencionadas, pero con una escasa o mínima evaluación, y que solo han traído resultados parciales. Pero sutilmente, al mismo tiempo, se ha agravado la situación: se suaviza una coyuntura difícil, pero las raíces siguen hundiéndose más hondo. Las condiciones han cambiado y cada día aparecen elementos que no fueron considerados previamente.

Las diferentes experiencias permiten legitimar la necesidad de la concertación, en aras de construir un futuro para todos en la ciudad, con las instituciones del Estado y los habitantes de todos los barrios de la ciudad, con las organizaciones comunitarias y con la empresa privada, etc.

Es importante señalar que la situación ha sido abordada fundamentalmente desde la perspectiva del gobierno municipal, con la importante participación de la Iglesia y algunas organizaciones sociales, con la mayoría de ciudadanos como espectadores no comprometidos. Sin embargo, hoy, la estrategia que se ha venido implementado desde la misma comunidad y liderada por los sacerdotes en sus respectivas parroquias, consiste en la construcción Mesas de Trabajo Barriales, de las cuales son conocidas 21, que funcionan de forma autónoma. Buscan apoyarse para sus proyectos de reconstrucción del tejido social en la participación de maestros, madres comunitarias, directores de grupos juveniles y de la Tercera Edad, personal del sector de la salud y padres de familia.

Las *mesas de trabajo* son mecanismos propios de participación barrial, constituidas en orden de enfrentar los conflictos violentos. Parten pues de reconocer 2 hechos: de un lado; que la seguridad ciudadana debe ser atendida por las Instituciones gubernamentales, y de otro lado, se reconoce la responsabilidad que cabe a la misma comunidad para intervenir directamente los procesos de desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida.

Partiendo del interrogante que a mi modo de ver es lógico y cuestiona el funcionamiento y la eficacia de estas mesas, de ¿cómo enfrentar la situación de agresión que afecta a toda la comunidad, sin pertenecer a ninguno de los grupos armados en conflicto? encuentro barreras históricas, entre las cuales se reconocen:

- Inexperiencia para trabajar de una manera coordinada, interinstitucional e intersectorialmente. Existen muchas organizaciones al interior de las comunidades, tales como grupos deportivos, culturales, acciones comunales, convites, grupos solidarios, iglesia, etc. Pero trabajan por separado, generando un impacto mínimo.

- Poca habilidad en la gestión para plantear soluciones o mecanismos de intervención sin poner en riesgo la propia integridad.
- Poco conocimiento de métodos de intervención social.

Desde la perspectiva administrativa, desde el año 2002, el Alcalde Luis Pérez presentó una nueva propuesta –que fue llevada al Concejo Municipal para su aprobación- para ser aplicada tomando como base tres barrios de la ciudad que se consideran neurálgicos por su clima de violencia: Belencito (comuna 13), Santo Domingo Sabio (comuna 1) y París (comuna 5). La propuesta consistió en proponerle a los alzados en armas que se sometieran a un proceso de reeducación en una actividad productiva durante 12 meses, recibiendo a cambio un salario mensual de un millón de pesos, luego de ese tiempo, la Alcaldía abriría unos puestos de trabajo en esas actividades productivas con un salario garantizado por 10 ó 15 años. Por supuesto, se requería que dejaran las armas y que simultáneamente y para garantizar el orden en estas zonas, se incrementara el pie de fuerza, contratando 2.000 policías adicionales para la ciudad.

Como se ve se trataba de un proyecto a largo plazo –así lo reconoció el entonces Secretario de Gobierno municipal, Jorge Enrique Vélez en declaraciones al periódico El Mundo (Septiembre 12/2002, p. 5B)- y que no establecía claramente las metas, las estrategias de acercamiento y negociación y menos de dónde iba a salir el presupuesto requerido.

Las propuestas siguen sobre la mesa, todas se auscultan, se plantean y se discuten, pero la ciudad, pese al gran despliegue que se hace sobre el incremento del pie de fuerza –mayor número de policías- regreso a los barrios periféricos con nuevas estaciones de policía e instalación de cuarteles y los tímidos proyectos de inversión, aún se encuentra muy lejos de un verdadero proyecto de paz. Se hace imprescindible un cambio paradigmático en torno a las condiciones de la seguridad de los ciudadanos y la convivencia: hay que superar el papel exclusivo

del Estado y su visión represiva, para colocar en su lugar *la intervención y el compromiso ciudadano*.

Participación democrática, presencia estatal efectiva con el fortalecimiento de los aparatos policiales y judiciales, además de los organismos planificadores y de gestión, atención a las derechos humanos y económicos: son las bases de un pacto democrático .

En síntesis: considero que el conflicto social solo se puede gestionar a través de la participación democrática y que, en este orden, la estrategia impone la negociación política como método para la resolución de conflictos –tal como lo plantea la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil, en Medellín- sobre la base de construir una sociedad más equitativa e incluyente, que respete y proteja los derechos humanos.

En la base de la convivencia, como indicamos al iniciar este aparte, los métodos de intervención tienen que estar centrados en la prevención y el control, pero todo ello con miras a encontrar la seguridad jurídica y el apego a las normas, la seguridad ambiental, la redistribución de las riquezas y el respeto por los derechos humanos, civiles, económicos, políticos y culturales.

Ahora bien y para finalizar, es necesario destacar que en medio de este caos, generado por la violencia, existen también fortalezas: de un lado, hay una relativamente fuerte identidad de los pobladores con sus respectivos barrios y con la ciudad, y de otro lado, existe la convicción ciudadana de que la solución no es a corto plazo y que ella solo se logra con su propia participación en la búsqueda de alternativas.

Medellín, Agosto de 2003.

BIBLIOGRAFÍA DE REFERENCIA

Alcaldía de Medellín, (1994) MEDELLÍN EN PAZ. PLAN ESTRATÉGICO DE SEGURIDAD PARA MEDELLÍN Y SU ÀREA METROPOLITANA, Municipio de Medellín.

Alcaldía de Medellín (1999) MARCO ESTRATÉGICO DE CONSTRUCCIÓN DE LA PAZ EN MEDELLÍN – COLOMBIA, Municipio de Medellín.

Análisis e Inteligencia.com (2002) “La guerra urbana en Colombia” documento de Internet, <http://www.analysiseinteligencia.com/analisis24.html>.

Camacho A. (1995) “Cinco tesis sobre el narcotráfico y violencia en Colombia”, en: Sánchez G, Peñaranda O. (Comp.) PASADO Y PRESENTE DE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA. Ed. IEPRI – CEREC, Bogotá.

Camacho A, Guzmán A. (1997) “La violencia urbana en Colombia: teorías, modalidades, perspectivas”, en: NUEVAS VISIONES SOBRE LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, Ed. FESCOL – IEPRI, Santafé de Bogotá.

Castaño, José A. (2002) “Casas abandonadas: drama de los barrios en disputa”, Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Abril 29, Medellín.

CEHAP Y PEVAL, (1984) INVESTIGACIONES N° 6, UNAL , Medellín



Centro de estudios de Opinión, CEO (1985) EL MEDELLÍN QUE YO QUIERO, Ed. Concejo de Medellín.

CEPAL (1985) LA POBREZA EN AMERICA LATINA: DIMENSIONES Y POLÍTICAS, Santiago de Chile.

Giraldo, Carlos A. (2002) “Guerra en la Ciudad”, Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Abril 28, Medellín.

Giraldo, Carlos A. (2002) “Me tocó pagarles hasta \$ 5 millones”, Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Octubre 20, Medellín.

Giraldo, Carlos A. (2002) “Guerra Urbana no ha prosperado”, Periódico el Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Mayo 2, Medellín.

Hopenhayn, Martín (1990) “Conflicto y violencia: Pantalla sobre un horizonte difuso” en Bejarano, Jesús (compilador), CONSTRUIR LA PAZ, Bogotá: CEREC.

Hopenhayn, Martín (2002) “Droga y violencia: Fantasmas de la nueva Metrópoli Latinoamericana”, en REVISTA ON-LINE POLIS Vol. 1 N° 3, Universidad Bolivariana de Chile, Santiago de Chile.

Jaramillo, Ana María (1994) ENTRE LA GUERRA Y LA PAZ. MILICIAS POPULARES EN MEDELLÍN, Ed. Región, Medellín.

Lomnitz, Larissa (2002) “Redes sociales y estructura urbana en América Latina” en León, Miguel (coord..) MOTIVOS DE LA ANTROPOLOGÍA AMERICANISTA: INDAGACIONES EN LA DIFERENCIA, UNAM, México.

McDonald, Geraldine (1998) *“Construyendo La Paz*, Revista AIR & SPACE POWER, de la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Naranjo Gloria (1992) MEDELLÍN EN ZONAS, Ed. Corporación Región, Medellín.

Patrialibre.org (2002) “Medellín heridas de ciudad” Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Medellín.

Pecaut Daniel (1997) “Pasado y presente de la violencia en Colombia” en Revista de ANÁLISIS POLÍTICO, Ed. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá

Periódico El Colombiano (2003) “El ELN admite freno en accionar urbano”, Junio 6, Medellín.

Periódico El Mundo, (1981) “Medellín una ciudad joven con problemas complejos” 29 de mayo, Medellín.

Periódico El tiempo (2003) “Bloque Metro. Tememos mayores presiones” Julio 18, Bogotá.

Revista Coyuntura Social (1991) “Indicadores Sociales” N. 5 FEDESARROLLO, Diciembre, Bogotá.

Romero, José Luis (1976) LATINOAMÉRICA: LAS CIUDADES Y LAS IDEAS, Ed. Siglo XXI, México.

Salazar, Alonso (1990) NO NACIMOS PA´SEMILLA, Ed. Región, Medellín.

Salazar, Alonso y Jaramillo, Ana María (1992) LAS SUBCULTURAS DEL NARCOTRÁFICO, Ed. Cinep, Santafé de Bogotá.

Salazar P., Robinson (2003) “La violencia en los sujetos desgajados e insumisos en América Latina”.

Sánchez Gonzalo –coordinador (1987) COLOMBIA: VIOLENCIA Y DEMOCRACIA, Ed. Universidad Nacional de Colombia, Bogotá.

Silva, Armando (1992) IMAGINARIOS URBANOS. CULTURA Y COMUNICACIÓN URBANA EN AMÉRICA LATINA, Tercer Mundo Editores, Bogotá.

Touzard, Hubert (1981) LA MEDIACIÓN Y LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS, Ed. Herder, Barcelona.

Useche A. Oscar, (1999) “Coordenadas para trazar un mapa de la violencia urbana en Colombia” en Revista NOVA & VETERA, N° 36, ESAP, Santafé de Bogotá, Septiembre.

Yarce Elizabeth (2002) “Medellín, 20 años de llanto en las calles” Periódico El Colombiano, Serie Conflicto Urbano, Abril 30, Medellín.

Zuluaga, Víctor León, (2002) “Desorden urbano y narcotráfico; Piezas del rompecabezas”, Periódico El Colombiano, Noviembre 29, Medellín.